



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

| | |
|---------------|---|
| Expediente | 647-16 |
| Implicado | HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH |
| Cargo | INSPECTOR DE POLICÍA URBANA |
| Dependencia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |
| Fecha hechos | ÚLTIMOS AL 13 DE FEBRERO DE 2017 |
| Fecha informe | 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| Informante | ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ JUZGADO DÉCIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE CALI |
| Asunto | FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA |

El Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 2 de la Ley 734 de 2002, el Acuerdo No. 101 de 2002 del Concejo Municipal y el Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016; una vez revisadas formal y sustancialmente todas las actuaciones adelantadas dentro del presente proceso disciplinario que conforman el expediente con radicación No.647-16, y al observar que no hay causal de nulidad que invalide todo o parte de lo actuado, procede a emitir el FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA de conformidad con lo establecido por el artículo 178 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

I. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO:

Se procede a resolver sobre la conducta del servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.623.237 expedida en Ciénaga, quien para la época de los hechos desempeñaba las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali, dependiente del organismo que actualmente se denomina SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA de la Alcaldía de Santiago de Cali; al haber sido encargado para el ejercicio del mencionado cargo mediante nombramiento realizado en la Resolución No. 4122.0.21.073 del 29 de enero de 2016, en el cual se posesionó según acta No. 0107 del 3 de febrero de 2016, de acuerdo con la información que suministró la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, mediante la comunicación con radicado Orfeo 201841370400011004 del 12 de febrero de 2018 (folios 51 a 68).

El mencionado servidor público es destinatario de la ley disciplinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, disciplinable por parte del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.

II. RESUMEN DE LOS HECHOS

El 28 de octubre de 2016 la señora ÁNGEL TERESA MORENO HERNÁNDEZ radicó ante la Personería de Santiago de Cali una queja disciplinaria contra los servidores públicos AMPARO RAMÍREZ MACÍAS y HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, quienes para la época de los hechos desempeñaron en sus respectivas oportunidades



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

el cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II, en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali, dependientes de la actualmente denominada SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA de la Alcaldía de Santiago de Cali.

La señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ explicó en su queja que su compañero permanente JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR había instaurado el 22 de abril de 2014 una querella policiva de humedad ante la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta, a raíz de unas humedades que se presentaron en el primer nivel del inmueble localizado en la diagonal 28C No. 34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, ocasionadas desde el segundo nivel del mismo inmueble, de propiedad del señor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, hermano de su esposo.

La quejosa indicó que en el trámite de dicha querella se surtieron varias actuaciones por parte de la servidora pública AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, de las cuales refirió la audiencia de conciliación realizada entre las partes y una inspección ocular para establecer la existencia de la humedad y determinar las obras que se debían realizar, y que el día 2 de octubre de 2015 su marido presentó un escrito a la Inspectora realizando una serie de observaciones a la inspección ocular que se realizó el 8 de agosto de 2014, y que el 9 de octubre de 2015 presentó a nombre propio un escrito coadyuvando la querella de su marido, debido a la problemática que generaba el estado del inmueble, y que en respuesta recibieron el oficio No. 289 del 20 de octubre de 2015 en que la Inspectora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS les comunicó que accedía a realizar una nueva inspección ocular en el inmueble objeto de la querella, pero que no fijó fecha para su realización, actuación que quedó pendiente a cargo de la Inspección de Policía.

Narra que el 22 de octubre de 2015 dirigieron un nuevo escrito a la Inspectora solicitando su pronunciamiento sobre aspectos que no se habían resuelto, reiterando la solicitud el 18 de diciembre de 2015; sin embargo, el nuevo Inspector de Policía HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH quien relevó a la funcionaria AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, el 2 de agosto de 2016 expidió el auto No. 4161.2.24.027 que notificó por edicto el mismo día, rechazando de plano su solicitud de coadyuvancia sin explicar razón alguna para ello, y que el 10 de agosto de 2016 procedió a emitir el auto interlocutorio No. 4161.2224.1-01 en que decretó la perención de la querella con base en el artículo 277 del Código Departamental de Policía, y procedió al archivo del expediente explicando que *“las partes no han realizado actuaciones para la continuación del proceso, pues, la última había sido el 22 de octubre de 2015, decisión que no tuvo recursos”*; esa decisión la notificó por edicto el mismo día en que la expidió, archivando de esa forma la querella después de dos años, tres meses y 19 días, a pesar de estar pendiente de resolver cuatro situaciones parte de la Inspección de Policía, como eran:

- a) Realizar una nueva inspección ocular.
- b) Avocar lo relacionado con la perturbación denunciada sobre el uso y disfrute del primer piso, porque el patio de la parte de adelante había sido techado.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

- c) Expedir las fotocopias del expediente.
- d) Resolver la coadyuvancia que presentó.

Reiteró la quejosa que insistieron en las respuestas a las peticiones incoadas y que estuvieron a la espera de que la Inspección de Policía realizara la inspección ocular. También denunció que el Inspector de Policía confundió la notificación y ejecutoria de la decisión del 2 de agosto de 2016, violando las normas de procedimiento (folios 3 a 9).

La Dirección DOVCO de la Personería de Santiago de Cali mediante la comunicación No. 20162300130471 del 02 de noviembre de 2016, resolvió trasladar la competencia a este Despacho para resolver y conocer de la queja (folio 1).

De otro lado, bajo la radicación No. 068-17 se dio inicio al proceso disciplinario en contra del servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, en virtud de la decisión que comunicó el JUZGADO DÉCIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE CALI, mediante el Oficio No. 106 del 19 de enero de 2017 (folio 106) en que comunicó la decisión adoptada mediante auto de sustanciación No. 021 dentro del trámite de un incidente de desacato al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela No. 145 del 07 de diciembre de 2017, expedida dentro del trámite de la acción de tutela adelantada bajo radicación No. 2016-00261-00, promovida por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, en la que se había ordenado tutelar los derechos al debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia y defensa, ordenándole al servidor público que dejara sin efecto alguno el auto interlocutorio No. 4161.2.24.1.01 del 10 de agosto de 2016, y que en su lugar, procediera a fijar fecha para que se llevara a cabo la inspección ocular en los términos en que se había informado que se haría, mediante el oficio No. 289 del 20 de octubre de 2015 dirigido al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Con base en la queja disciplinaria formulada por la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, expediente No. 647-16, el Despacho expidió el auto No. 4124.010.9.13-647-16-4187 del 19 de diciembre de 2017, ordenando llevar a cabo una indagación preliminar conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, para recaudar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. En dicha decisión vinculó a los servidores públicos AMPARO RAMÍREZ MACÍAS y HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, librándose las respectivas citaciones para que recibieran la respectiva notificación personal, compareciendo únicamente el señor HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH el día 25 de enero de 2018, surtiéndose la notificación subsidiaria por edicto a la señora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS.

En desarrollo de este proceso disciplinario, fueron practicados medios de prueba testimonial y documental, y se escuchó la versión libre del investigado HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

En relación con el expediente No. 068-17, el Despacho expidió el auto No. 4124.010.9.13-068-17-1143 del 21 de marzo de 2017 (folios 119-120), ordenando igualmente la indagación preliminar dispuesta en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, vinculando en este caso únicamente al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, quien recibió la notificación personal el 4 de abril de 2017 (folio 124), recaudándose en este caso medios de prueba documental y testimonial, así como la versión libre del investigado.

Los expedientes con radicaciones 647-16 y 068-17, fueron acumulados para ser tramitado como uno solo, con la radicación más antigua, habida cuenta que se refieren conductas conexas entre sí, identidad de servidor público y de hechos en circunstancias de tiempo, modo y lugar; decisión que se adoptó mediante el auto No. 4124.010.9.068-17-1617 del 27 de julio de 2021 (folios 102-103).

Mediante auto No. 4124.010.9.13.647-16-1618 del 27 de julio de 2021 (folios 336 a 349), se ordenó la aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia del servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, al encontrar no solo viable la apertura de la investigación disciplinaria sino también la formulación de cargos en su contra, ordenando la desvinculación de la servidora pública AMPARO RAMÍREZ MACÍAS. Se efectuaron las correspondientes notificaciones de la decisión.

En desarrollo del procedimiento verbal, fueron realizadas las audiencias de lectura de la decisión que contiene la formulación de cargos y recepción de descargos; la etapa de decreto y práctica de pruebas, y la etapa de recepción de los alegatos de conclusión.

Consta en dichas actuaciones que el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, en ejercicio de su derecho de defensa propuso en la audiencia verbal de 13 de diciembre de 2021, nulidad procesal por violación del debido proceso, derecho de defensa y alegando una violación de términos procesales, como también alegó el acaecimiento de la prescripción de la acción disciplinaria; situaciones sobre las cuales el Despacho se pronunció en la misma audiencia, negando la nulidad impetrada y resolviendo negar el recurso de reposición de interpuso.

De igual forma consta que el servidor público propuso una recusación en contra del Director del Departamento Administrativo, como operador disciplinario, lo que fue tramitado trasladando el conocimiento del asunto al Señor Alcalde en segunda instancia, expidiéndose el pronunciamiento que consta en la Resolución No.4112.010.21.0003 del 1 de marzo de 2022, en que se declaró infundada la recusación y ordenó continuar conociendo del proceso.

Consta también que el servidor público promovió acción de tutela en contra de este Departamento Administrativo, la cual fue conocida y resuelta en primera instancia por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali mediante la Sentencia No.06 del 17 de enero de 2022, negando el amparo constitucional invocado, e impugnada la decisión



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

**"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"**

por el investigado, fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali, mediante la sentencia No.9 del 17 de febrero de 2022.

El servidor público también radicó solicitud el 08 de octubre de 2021 para que el conocimiento, trámite y decisión de este proceso disciplinario, fuera trasladado a la Personería Distrital de Santiago de Cali. Conocida por la Personería dicha petición, mediante el Oficio No. 20212300320281 del 14 de octubre de 2021 comunicó el auto emitiendo concepto negativo para la solicitud de ejercicio del poder disciplinario preferente.

La solicitud que invocó el investigado para que interviniera en la actuación un representante del Ministerio Público, fue puesta en conocimiento de la Personería para los fines de su competencia, intervención que dentro del procedimiento no es obligatoria para tramitar y resolver la actuación.

Sin estar pendiente de resolver situaciones accesorias, se resuelve de fondo este asunto.

III.

ARGOS FORMULADOS

C

Al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH le fueron formulados los siguientes cargos:

PRIMER CARGO:

Incumplir el deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, de impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedad No. 1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No. 34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, el cual procedió a archivar injustificadamente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, situación que implicó que la problemática de humedad que al parecer constituía una contravención común, quedó sin decisión de fondo y por ende sin solución, pudiéndose haber violado lo previsto en el citado Decreto Municipal 1944 de 1997 y el deber funcional previsto para su cargo en el Decreto Municipal No.411.20.00062 del 23 de febrero de 2007.

SEGUNDO CARGO:

Posiblemente incumplir el deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No. 1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No. 34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, comportamiento que también pudo haber implicado un posible abuso indebido del cargo o función, toda vez que la



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

**"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"**

decisión de archivo con la que concluyó el proceso, el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, fue basado en una disposición inaplicable dentro del proceso de humedad, y carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido alguna carga procesal, o que la falta de impulso o trámite del proceso le era atribuible a su abandono.

IV. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS

En relación con comportamiento que comprende el primer cargo, se consideró que podía configurar la falta disciplinaria tipificada en los numerales 1o de los respectivos artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, al no cumplir lo dispuesto en el Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997 para impulsar, tramitar y resolver de fondo el proceso de humedad No. 1944-549, seguido contra el infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, procediendo archivarlo de manera injustificada mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, sin expedir la decisión de fondo, como le correspondía hacerlo según el manual de funciones previsto para su cargo en el Decreto Municipal No. 411.20.0062 del 23 de febrero de 2007.

En relación con el comportamiento con que se estructuró el segundo cargo, se consideró que podía configurar un incumplimiento del deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No. 1944-549, y un abuso indebido del cargo o función, toda vez que la decisión de archivo del 10 de agosto de 2016 con que concluyó el proceso, la basó en una disposición inaplicable dentro del proceso de humedad, y que además carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido alguna carga procesal, o que no impulsó el proceso y que abandonó su trámite, contrariando de esa forma lo previsto en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

V. CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA Y DE LA FORMA DE CULPABILIDAD

Habiendo sido determinado dos cargos contra el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, cada uno fue calificado provisionalmente como posible FALTA GRAVE, cometidas a título de DOLO.

VI. DESCARGOS

El 13 de diciembre de 2021 se realizó la audiencia en que se cumplió la etapa de lectura de cargos, recepción de descargos y solicitud de pruebas, orientando el servidor público su intervención a la sustentación de una nulidad procesal que fue resuelta en el mismo acto, junto con el recurso de reposición que invocó, de lo que ya consta en la actuación los correspondientes pronunciamientos.

En lo más relevante de sus explicaciones el servidor público ataca la temeridad y mala fe en la proyección de la decisión de citación a audiencia y aplicación del procedimiento verbal, de la que dice no ver en buenos términos el proyecto, con



RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

consideraciones desproporcionadas, indica que se desconocieron los términos previstos en la ley 734 de 2002 que son de estricto cumplimiento, lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias que indicó: T-504 de 2013 y C-036 de 2003, y finalmente sostiene que la perención fue aplicada en derecho, toda vez que la norma lo permite por el abandono de la querella en un término de más de diez (10) días, por lo que el proceso debió ser archivado.

El servidor público solicitó medios de prueba que fueron decretados, y además, peticiones accesorias que fueron resueltas en su oportunidad procesal.

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Fueron desarrollados en audiencia celebrada el 01 de abril de 2022 por el propio servidor público, que como abogado quiso representarse a sí mismo.

Reiteradamente sostuvo que en la investigación disciplinaria se actuó con negligencia al darse impulso el proceso con más de tres años, y que se saltaron etapas procesales como la indagación preliminar, apertura de investigación, cierre de la misma y pliego de cargos, y que de manera desproporcionada, indebida e ilegal se violaron los términos previstos en la norma para tramitar el proceso disciplinario, del cual se debió ordenar el archivo de la investigación cuando fue evaluado el mérito de las indagaciones preliminares, bajo las argumentaciones que desarrolló en torno a la prescripción de la acción de la acción disciplinaria, la falta de sustento o análisis desviado y temerario que dice haberse realizado en la elaboración del proyecto de aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia. Reitera la demora en el cumplimiento de las etapas procesales, con falta de competencia y violación del debido proceso, que para la valoración del proceso no se realizó una reunión que dijo tener conocimiento que se hacía. También adujo y expuso fallos judiciales o sentencias de Altas Cortes para sustentar la violación del debido proceso, los términos procesales y el sustento fáctico del proceso, en lo que dice que se desconoció de manera aberrante, maliciosa y temeraria la jurisprudencia y la ley, y específicamente la legalidad y posibilidad de aplicación de la figura de la perención en los procesos policivos, como también dijo que se desconoció la autonomía en la decisión de los Inspectores de Policía en los asuntos de su competencia, y que no se realizó un verdadero estudio del expediente policivo.

VIII. MEDIOS DE PRUEBA

Se tienen como medios de prueba válidamente recaudadas las siguientes:

DOCUMENTALES:

1. La queja escrita formulada por la señora ANGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, inicialmente radicada ante la Personería el 28 de octubre de 2016, como compañera permanente del señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

2. Las copias del proceso policivo que se identificó con el radicado No.1944-549 correspondiente al procedimiento de humedad iniciado con base en la querella policiva instaurada por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, contra el señor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, cuyo trámite y decisión fue asignado por reparto a la Inspección de Policía Urbana del Barrio la Nueva Floresta de Cali. En dicho proceso policivo se pueden establecer cuáles fueron las actuaciones o decisiones adoptadas por cada uno de los Inspectores que le correspondió realizar el trámite, verificándose entonces que fue el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH quien dispuso el archivo de las diligencias, culminando el procedimiento en la forma que se le censura y bajo los argumentos que expuso en la decisión del 10 de agosto de 2016.
3. Las copias de la acción de tutela y decisiones de primera y segunda instancia adoptadas por los jueces de conocimiento, que permiten establecer cuáles fueron los argumentos del señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, su pretensión, y el sustento de las decisiones de los jueces constitucionales de tutela, de lo que no se evidencia que se le hubiere imprimido declaración de legalidad de la decisión que concluyó el proceso.
4. Las copias tanto del Decreto Municipal 1944 de 1997 como del Decreto Municipal 0062 de 2007, que consagran las obligaciones del servidor público y cómo debía cumplirse su deber funcional.
5. Los antecedentes administrativos y laborales de los servidores públicos que se vincularon, que permiten establecer desde cuándo hasta cuándo, cada uno desempeñó el cargo de Inspector de Policía que les permitió conocer del proceso policivo.

TESTIMONIALES:

1. La declaración jurada rendida el 10 de mayo de 2017 por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, persona que figura tanto como querellante en el proceso policivo No.1944-549 de la Inspección de Policía, como accionante de la acción de tutela, reclamando por la falta de solución a la problemática de la humedad que afecta su construcción y que finalmente quedó irresoluta. Dicha persona, JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR también fue escuchado en declaración jurada el 10 de abril de 2018, en consideración a que los expedientes 647-18 y 068-17 se venían tramitando por separado, coincidiendo entonces los dichos expuestos por el mencionado, con lo expuesto por la quejosa ANGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, como su compañera de vida.
2. La declaración jurada rendida por la señora PATRICIA INÉS CORINA ROJAS CÁCERES, quien ratificó en la audiencia correspondiente que la aplicación de la perención era viable en los procedimientos por humedad en las condiciones previstas en la norma policiva departamental.
3. La declaración jurada rendida por el señor ANGEL MARÍA NAVIA QUINTERO, igualmente ratificó la viabilidad y legalidad en la aplicación de la perención en los procesos de humedad, esa clase de decisiones son adoptadas por los Inspectores de Policía en los asuntos de su competencia.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

IX. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La presente investigación disciplinaria se inició con base en la queja formulada por la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, por hechos que igualmente fueron objeto de la acción de tutela que cursó en el Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, promovida por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, compañero de la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, contra el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, en su condición de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA SEGUNDA CATEGORÍA dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.

De acuerdo con la queja y los elementos de prueba recaudados, los hechos motivo de la inconformidad de la quejosa y de la acción de tutela en mención, están relacionados con el procedimiento policivo que consta en el expediente que se identificó en la Inspección de Policía Urbana de Segunda Categoría con sede en el Barrio La Nueva Floresta con el número de radicación No. 1944-549, correspondiente a un PROCEDIMIENTO POLICIVO DE HUMEDAD, debido a la humedad y daños que presentaba y afectaba el primer piso del inmueble ubicado en la Diagonal 28 C No. 34-65 de Cali, al parecer generada desde el segundo piso, parte ocupada por el querellado HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, situación que además había generado una problemática de convivencia.

A la investigación disciplinaria se allegó la copia del mencionado expediente, en el cual consta el trámite, actuaciones y decisiones adoptadas, lo que claramente permite a este Despacho determinar que el procedimiento policivo o ritualidad debía atemperarse a la reglamentación especial consagrada en el Decreto Municipal No. 1944 del 20 de noviembre de 1997, *“Por medio del cual se asignan unas funciones a las Inspecciones de Policía Municipal y Desarrollo Comunitario y se establecen los procedimientos para imponer medidas correctivas a los contraventores en los asuntos relacionados con las humedades en inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali”*.

De acuerdo con los registros o actuaciones que constan en ese proceso policivo, el conocimiento, trámite y decisión inicialmente fue asumido por la servidora pública AMPARO RAMÍREZ MACÍAS. Posteriormente le correspondió continuar el trámite al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, ambos en el ejercicio del cargo o empleo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II, ejercido en sus respectivos períodos en que estuvieron encargados de los asuntos de competencia de esa Inspección de Policía.

Según la queja disciplinaria de la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, hacía dos años, tres meses y diecinueve días se había instaurado la querrela policiva que originó ese proceso, y que solo la servidora pública AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, adelantó actuaciones en el curso de proceso, hasta quedar en espera de llevarse a cabo una nueva visita o inspección ocular en el inmueble ya mencionado; pero que habiendo asumido su conocimiento el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

SAURITH, quien relevó a su predecesora, lo único que hizo fue expedir un auto de fecha 2 de agosto de 2016 en el que resolvió rechazar la solicitud de coadyuvancia reclamada entre los compañeros permanentes ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ y JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, desconociendo que eran interesados en el resultado del procedimiento policivo, notificando esa decisión por edicto el mismo día en que la expidió, sin efectuar la notificación personal a los interesados; y que luego expidió el auto interlocutorio No.4161.2.24.1-01 del 10 de agosto de 2016, decretando la perención de la querella argumentando que “(...) *hasta la fecha las partes no han realizado actuación para que continúe el curso del proceso, siendo ésta última por el querellante, el 22 de octubre de 2015*”.

Como consecuencia de ello, se quejó la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ porque se ordenó el archivo del expediente sin resolverse el problema de humedad, sustentado en una disposición que consideró que no era la aplicable, y que se desconocía que era a la Inspección de Policía a la que le correspondía efectuar una nueva visita en el inmueble afectado, y luego adoptar la decisión que en derecho correspondía, basando la decisión de archivo en el abandono de las partes interesadas para que se tramitara la querella, cuando lo que esperaban era que se programara la fecha y hora de la diligencia de inspección ocular con perito.

Las pruebas documentales recaudadas, específicamente las correspondientes al proceso policivo que adelantó la Inspección Policía, permiten al Despacho verificar cuáles fueron las actuaciones adelantadas en ese proceso policivo, así:

1. Con fecha 6 de junio de 2014 el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, esposo de ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, dirigió a la Inspectora Urbana de Policía Categoría II del Barrio La Nueva Floresta, una solicitud de inspección ocular con perito, para que se estableciera la causa y solución de una humedad que afectaba su inmueble en la Diagonal 28C No.34-65 de Cali, generada desde la parte del inmueble ocupada por su hermano HERNANDO LONDOÑO CUELLAR.
2. El 6 de junio de 2014 la Inspectora Amparo Ramírez Macías avocó el conocimiento de la queja y ordenó resolverla aplicando el procedimiento previsto en el Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997 y demás normas concordantes, ordenando además fijar fecha para realizar una audiencia de conciliación y la práctica de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
3. El 25 de junio de 2014 dicha funcionaria llevó a cabo una audiencia de conciliación en proceso de humedad, previas las citaciones de las partes, resultando infructuosa porque las partes no llegaron a ningún acuerdo, resolviendo la Inspectora continuar con el trámite del proceso.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

4. El 31 de julio de 2014 la Inspectora ordenó practicar una inspección ocular el 08 de agosto de 2014, con intervención de perito o auxiliar de la justicia, en el inmueble de las partes.
5. El 08 de agosto de 2014 la mencionada funcionaria llevó a cabo la diligencia de inspección ocular en el inmueble de las partes, con intervención y asesoría de la Ingeniera Luz Amparo Zapata como Perito, quien emitió un dictamen y realizó las recomendaciones para la solución de la humedad detectada.
6. Mediante auto del 08 de agosto de 2014 la Inspectora Amparo Ramírez Macías, ordenó correr traslado del dictamen pericial, por el término común de tres (3) días, observándose que en las copias de esa decisión no se aprecia la firma de la funcionaria ni acto alguno de notificación.
7. A fecha 02 de octubre de 2015 el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR dirigió un escrito solicitando la aclaración de la visita ocular bajo los argumentos que expuso para ello, solicitando que se dejara sin efecto las recomendaciones realizadas por la Perito en la visita del 08 de agosto de 2014, y que por ello consideraba que se debía realizar nuevamente la visita al inmueble con la asistencia de la perito.
8. Con fecha 08 de octubre de 2015, recibido en la misma fecha, se encontró un nuevo escrito dirigido a la Inspección de Policía por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, solicitando un pronunciamiento acerca de la construcción que presenta el antejardín del inmueble y que se le expidiera copias del expediente, autorizando que fueran entregadas a su compañera de vida ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ.
9. Petición de copias que fue reiterada por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, en escrito de fecha 09 de octubre de 2015.
10. Con fecha 09 de octubre de 2015 la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, elevó escrito referenciado como coadyuvancia de la solicitud de inspección ocular por humedades, informando que la querella había sido interpuesta por su marido, y que las humedades tenían origen en el segundo piso, solicitando además que se solucionara el conflicto relacionado con la construcción del antejardín, y enterando del conflicto de convivencia que se presentaba en el inmueble, aportando copias de actas de conciliación ante la jurisdicción de paz.
11. El 09 de octubre de 2015 la Secretaria de la Inspección dirigió el oficio No.279 a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, solicitando una diligencia de inspección ocular en el inmueble motivo de la querella, enterando de la situación que se presentaba con el cerramiento del espacio público.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

12. En fecha 13 de octubre de 2015 la funcionaria AMPARO RAMÍREZ MACÍAS libró los oficios No.285 dirigido a la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad para que se aplicaran las medidas pertinentes en relación el funcionamiento de un establecimiento de comercio en el lugar; y el No.286 a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico en relación con construcción en antejardín.
13. Con fecha 20 de octubre de 2015 consta la expedición de auto en que se dispone dejar sin efecto las recomendaciones hechas en el acta del 08 de agosto de 2014 en el proceso de humedad, y dispone fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de inspección ocular, teniendo en cuenta la agenda de la ingeniera perito Luz Amparo Zapata.
14. Con fecha 20 de octubre de 2015 se libró el oficio No.289 dirigido al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, en respuesta las peticiones que elevó con fechas 02, 08 y 09 de octubre de 2015, informándole que el Despacho había resuelto realizar nuevamente la inspección ocular en el inmueble de la diagonal 28C No.34-65 del Barrio El Paraíso, dejando sin efecto las recomendaciones de emitidas el 08 de agosto de 2014 por la Ingeniera Luz Amparo Zapata, se respondieron otras peticiones y se le indicó que la Inspección de Policía de la Nueva Floresta programaría nuevamente la fecha de la diligencia de inspección ocular, de acuerdo con la agenda de la Ingeniera, y que por escrito les sería notificada.
15. Con fecha 22 de octubre de 2015 los señores Jorge Eliécer Londoño Cuellar y Ángela Teresa Moreno Hernández, dirigieron escrito a la Inspectora solicitando su pronunciamiento en turno a los aspectos de sus peticiones anteriores, que consideraban que no habían sido resueltas, dilatándose la solución del conflicto.
16. Se incorporaron en el expediente las respuestas que obtuvo la Inspección de las peticiones u oficios que dirigió a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, y la remisión que hizo el DAGMA acerca de las denuncias realizadas por la señora Ángela Teresa Moreno H., por fuertes olores e impactos generados desde el segundo piso.
17. El 14 de diciembre de 2015 la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ dirigió un nuevo escrito a la Inspección de Policía con relación al proceso de humedad 1944-549, requiriendo que se realizara la inspección ocular que ordenó, para que la llevara a cabo en el mes de febrero de 2016 para facilitar el ingreso al inmueble.
18. Con fecha 02 de agosto de 2016 el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, en condición de Inspector de Policía de la mencionada Inspección del Barrio La Nueva Floresta, expidió auto a través de la cual resolvió rechazar de plano la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, por considerarla improcedente, indicando que contra esa decisión procedía el recurso de reposición, surtiendo en la misma fecha



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

“notificación por edicto”, fijado el 02 de agosto de 2016 y desfijado el 5 de agosto de 2016, sin constancia alguna de comunicación o notificación de la decisión a las partes del procedimiento policivo.

19. A fecha 10 de agosto de 2016 el servidor público expidió auto en el cual decretó la perención del procedimiento por abandono de las partes, al haber dejado transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de las que les correspondía para que el negocio continuara su curso o no asistir a la práctica de las pruebas solicitadas. Con ello ordenó el archivo del expediente, notificando la decisión de los señores Jorge Enrique Londoño y Hernando Londoño.

Consta entonces que el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR promovió la acción de tutela en contra del servidor público investigado, que tramitó en primera instancia el Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, el cual expidió la sentencia No.145 del 7 de diciembre de 2016 ordenando dejar sin efecto la decisión del funcionario adoptada en el auto de fecha 10 de agosto de 2016, por violación al debido proceso en conexidad con el acceso a la justicia y defensa, ordenándole que en las 48 horas siguientes el funcionario programara la práctica de la diligencia de inspección ocular, como se le había indicado y respondido al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, mediante el oficio No.289 del 20 de octubre de 2015.

Con fecha 12 de diciembre de 2016 se expidió el auto en que dispuso dejar sin efecto el auto No.4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, y fijar fecha para la diligencia de inspección ocular y notificarla a la parte interesada. La decisión no indica fecha y hora alguna.

Según anotación realizada a mano alzada con fecha 14 de diciembre de 2016 contenida en oficio No.4161.2.24.58 del 12 de diciembre de 2016, correspondiente a comunicación enviada al señor Jorge Enrique Londoño Cuellar para notificarle esa decisión, se hizo constar por quien la diligenció que: “toqué la puerta en varias ocasiones y nadie salió a recibir”.

Luego con fecha 26 de diciembre de 2016, se agregó constancia en la que se consignó que no se pudo programar la diligencia de inspección ocular, porque no se pudo establecer comunicación vía telefónica con la ingeniera Luz Amparo Zapata.

Oficio en similares circunstancias constan en el expediente con fechas 11, 24 y 26 de enero de 2017, agregándose de la Perito que según se informó regresaría después del 15 de febrero de 2017.

En acto de notificación personal llevado a cabo el 30 de enero de 2017, se le informó al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR acerca de la decisión del 12 de diciembre de 2017, se le solicitó que “confirmara a la inspección si desea que se nombrara a otro auxiliar de la justicia para realizar la diligencia de inspección ocular” porque si “es nombrado otro auxiliar de la justicia deberá cancelar nuevamente el valor

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

de los honorarios por ser un nuevo profesional que atenderá la diligencia”, respondiendo dicha persona que “no tenía dinero para pagar otra inspección ocular y que tampoco podía esperar a que llegara la ingeniera, que le resolvieran rápido”.

Consta entonces que con fecha 31 de enero de 2017 el señor HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH como Inspector de Policía, expidió auto fijando la fecha del 24 de febrero de 2017 a las 9:00 a.m., para llevar a cabo la Inspección Ocular, contactando para ello a la Ingeniera Luz Amparo Zapata, librándose las citaciones y realizándose las notificaciones personales a los señores JORGE ENRIQUE LONDOÑO y HERNANDO LONDOÑO.

Se allegó al expediente policivo la copia del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito en Oralidad de Cali, proferido en sentencia No.24 del 7 de febrero de 2017, en la que se resolvió revocar el fallo de tutela de primera instancia, negando la acción de tutela que invocó el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR.

Con base en dicha decisión el servidor público expidió el auto de fecha 13 de febrero de 2017, en el cual resolvió dejar sin efectos su decisión contenida en el auto No.4161.2.24.042 del 12 de diciembre de 2016 y el auto del 31 de enero de 2017, decisión que notificó personalmente a los interesados.

El incidente de desacato que se había iniciado por el Juez de la instancia ante el incumplimiento de la orden de tutela, fue archivado con fecha 14 de febrero de 2017.

Según la información laboral allegada de los servidores públicos investigados, la señora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS laboró como Inspectora de Policía Urbana 2a Categoría hasta el día 30 de junio de 2016 (folio 51), asumiendo su reemplazo el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH el 1° de julio de 2016.

Es evidente que correspondía a la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali, por tanto a los funcionarios encargados de ese empleo, tramitar y resolver la querella instaurada por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, toda vez que los hechos denunciados por dicha persona estaban relacionados con una problemática de humedad que afectada el saneamiento de su inmueble, así como también la convivencia de los ocupantes.

De hecho, desde que se avocó el conocimiento y trámite de la querella, se indicó que el procedimiento a aplicar era el previsto en el Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997, disposición que como ya se dijo asignó a las Inspecciones de Policía las facultades y funciones para conocer de esa clase de procedimientos en única instancia.

El texto del Decreto Municipal No.1944 del 20 de noviembre de 1997 se incorporó en el expediente, el cual fue expedido por el Alcalde de Santiago de Cali en uso de las facultades constitucionales y legales, considerando que era deber de las autoridades



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

**"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"**

de policía velar por la conservación del orden público interno como resultado de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, ecología y ornato, para regular la convivencia pacífica y proteger los derechos y garantías individuales, y que disposiciones como la ordenanza No.001 del 12 de julio de 1990, señalaba para entonces las sanciones a imponer cuando se presentaban filtraciones de agua en los inmuebles urbanos, tipificando de esa forma una contravención que no desapareció con la expedición del nuevo Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana (Ordenanza 343 de 2012), vigente para la época de los hechos, estableció:

"ARTÍCULO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS-. FILTRACIONES DE AGUA.- Cuando una cañería se dañe produciendo filtraciones o se rompa derramando el agua, inunde o humedezca una pared o una casa o de otro modo cause daño, el dueño o encargado del mantenimiento de las aguas tiene el deber de quitarlas hasta que el daño sea remediado. En caso contrario, la persona perjudicada podrá acudir a la autoridad sanitaria competente para que compruebe el daño y se repare, a costa de quien tenía el deber de hacerlo."

Por ello, el Alcalde de Santiago de Cali había definido y establecido en el Municipio el mencionado proceso contravencional de humedad, determinando en el artículo 1º del citado decreto que a través de los Inspectores de Policía Municipal se conocerían de las contravenciones y la imposición de las correspondientes medidas correctivas en asuntos relacionados con humedades en inmuebles ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, y de las ocasionadas por el mal estado del acueducto, del alcantarillado, por aguas lluvias no recogidas por falta de canoas o bajantes, nacimientos de agua, por mal estado de las instalaciones o acometidas internas de redes hidráulicas o por otras situaciones que presenten las construcciones de las viviendas.

El mencionado Decreto Municipal determinó que se trataba de un procedimiento que podía iniciarse de oficio o a petición del interesado de la construcción afectada, y que sometida a reparto esa petición o querrella se asignaba el Inspector de Policía responsable o competente de adelantar el procedimiento detallado claramente en la norma, y que en sus aspectos generales comprende las siguientes etapas:

- Avocar el conocimiento.
- Celebrar una audiencia de conciliación entre las partes, en la que se resumiría el conflicto, identidad de las partes, fórmulas de arreglo, qué debía hacerse, por quién, en qué lugar y en qué plazo.
- Vencido el plazo fijado en la audiencia sin que las obras acordadas se hubiere realizado, o agotada dicha audiencia y no hubiere acuerdo alguno, el funcionario de conocimiento debía continuar el procedimiento y realizar una diligencia de inspección ocular con perito en la que se determinarían las obras a realizar por parte del infractor.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

- Se debía oír en descargo al contraventor, y si aceptaba los cargos y se comprometía a realizar los correctivos pertinentes, se le concedería un plazo para ello no mayor de 30 días calendario, en caso contrario se continuaría con el procedimiento.
- Concluida la exposición del presunto contraventor, decretadas y practicadas las pruebas necesarias (Inspección Ocular con perito), se expediría la correspondiente resolución en la que se impondría la medida correctiva más conveniente, habida consideración de las circunstancias del hecho y de las pruebas recaudadas, contra la cual solo procedería el recurso de reposición que para entonces determinaba el artículo 229 del Decreto Ley 1355 de 1970, anterior Código Nacional de Policía.
- En caso de incumplimiento procedía la aplicación de los artículos 198, 199 y 200.

El manual específico de funciones del cargo de Inspector de Policía Urbana Categoría II, establecía en el Decreto Municipal 411.20.0062 del 23 de febrero de 2007, la función esencial de recepcionar, tramitar y fallar sobre los asuntos que por competencia y jurisdicción le corresponda, conforme a las leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos, lo que por tanto, el procedimiento policivo del Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997, era de obligatorio y estricto cumplimiento para los servidores públicos encargados de ejercer como Inspectores de Policía Urbana.

Como se analizó en su oportunidad, la señora AMPARO RAMÍREZ MACÍAS como Inspectora de Policía avocó dicha querrella e inició el trámite con sujeción al referido procedimiento, de tal forma que agotó de las etapas indicadas la conciliación entre los sujetos procesales, lo que resultó fallido; y luego llevó a cabo la diligencia de inspección ocular con perito, determinando las obras que debían realizarse para solucionar la problemática de la humedad.

Es relevante considerar que en el acta de dicha inspección ocular del 8 de agosto de 2014, se indicó si las obras eran realizadas ello fuera informado al Despacho. Por ello se debe tener en cuenta que los señores JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR y ANGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, dirigieron a la Inspectora de Policía los escritos anteriormente indicados controvirtiendo las obras que fueron recomendadas para subsanar la problemática de la humedad, solicitando que se llevara a cabo una nueva visita de inspección ocular con perito en el inmueble.

La respuesta de la Inspección de Policía a esa petición de quienes tenían interés en el resultado del procedimiento fue clara: según el auto del 20 de octubre de 2015, y el oficio No.289 de la misma fecha, era dejar sin efecto las recomendaciones realizadas por la perito y realizar de nuevo con su asesoría la inspección ocular, en fecha y hora que previamente se notificaría a los interesados, situación que no se observa que se hubiere cumplido por parte del servidor público al que le correspondió asumir el Despacho o empleo y continuar tramitando la querrella policiva, constando en el expediente que sus actuaciones no fueron orientadas o determinadas para continuar el



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

procedimiento y resolver el conflicto o problemática de humedad, sino que lo fueron únicamente para despachar de manera desfavorable la solicitud de la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, esposa del señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, negando su coadyuvancia por considerarla improcedente, según auto de fecha 02 de agosto de 2016 que sin comunicación o acto formal de notificación personal a los interesados, inició en la misma fecha la notificación por edicto; y posteriormente a fecha 10 de agosto de 2016 procedió al archivo del expediente como consecuencia de considerar viable la aplicación de la perención en los términos previstos por el artículo 277 del Código Departamental de Policía, y aduciendo para ello el que la última actuación del querellante había sido realizada en fecha 22 de septiembre de 2015, sustentando de esa forma la premisa o requisito de la perención del abandono de la querella por dejar el interesado transcurrir más de diez (10) días sin realizar gestión que corresponde para que el negocio continúe su curso o no asista a la práctica de pruebas que haya solicitado.

El servidor público tanto al exponer sus descargos como al presentar sus alegatos de conclusión, fue enfático en sostener que dicha figura es aplicable en los procedimientos policivos por humedad. Incluso a instancia suya se recaudaron los testimonios de quienes en sus oportunidades ejercieron funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA, la doctora PATRICIA INÉS CORINA ROJAS CÁCERES y el doctor ÁNGEL MARÍA NAVIA QUINTERO, quienes en sus declaraciones juradas sostuvieron igual posición.

La mencionada figura de la PERENCIÓN EN LOS PROCESOS POLICIVOS que resolvió aplicar el servidor público, está consagrada en el artículo 277 del Código Departamental de Convivencia y Seguridad, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE.- PERENCIÓN DE LOS PROCESOS POLICIVOS.- Cuando la parte interesada deja transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de las que corresponden para que el negocio continúe su curso o no asista a la práctica de las pruebas *por ella solicitadas se declarará la perención del proceso.*

El funcionario al decretar la perención ordenará archivar el expediente y cancelar su radicación.

Esta providencia no es susceptible de recurso alguno.

Decretada la perención del proceso no habrá posibilidad de intentar uno nuevo por la misma causa.”

Sin entrar el Despacho a definir acerca de si viable o no la aplicación de esa institución en los procedimientos de humedad específicamente regulados por la disposición municipal, y su naturaleza jurídica; y de considerarle aplicable acorde a lo sostenido por el investigado y por los declarantes, no puede desconocerse los requisitos o condiciones que se requieren para su aplicación, y es el precisamente dejar la parte



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

interesada transcurrir más de diez (10) días hábiles, sin hacer ninguna gestión de las que le corresponden para que el negocio continúe su curso o no asista la práctica de las pruebas que solicitó.

La doctrina y jurisprudencia nacional ha dicho que el fenómeno de la perención consiste en la extinción de un proceso causada su paralización, durante un término preestablecido en la ley, por inactividad del demandante que transgrede el deber de efectuar su impulso.

Se trata de una forma anormal de finalización de un proceso con identidad jurídica propia, ya que presenta clara diferencia frente a otras formas que trae el ordenamiento jurídico, como son el desistimiento, la transacción y la conciliación, en cuanto éstas involucran la voluntad de las partes procesales en un acto jurídico con relevancia procesal, mientras que aquella resulta de un hecho ocasionado por el transcurso del tiempo, al cual se le reconocen efectos jurídicos procesales. Pero adicionalmente ha precisado que se debe tener en cuenta que los procesos administrativos se caracterizan por un fuerte impulso oficioso, es decir que la mayor parte de las actuaciones procesales que lo ponen en marcha están a cargo del juez o funcionario de conocimiento y no de las partes, ya que el ejercicio de la función pública debe ser eficaz, pronta, diligente y cumplida, lo que se concreta en el principio de celeridad, de tal modo que los términos procesales los debe observar con diligencia y su incumplimiento puede ser sancionado. Por ello, la perención solamente se genera cuando la paralización o inactividad del proceso se debe a la exclusiva negligencia o inactividad de las partes, siempre y cuando no se producto del incumplimiento de los deberes del funcionario de realizar el impulso procesal oficioso.

Por ello, en el caso que nos ocupa el reproche disciplinario ha sido el incumplimiento del deber funcional de impulsar, tramitar y resolver el proceso de humedad, que se procedió a archivar injustificadamente cuando se adujo que la parte querellante no había realizado impulso procesal alguno de la actuación policiva, desconociendo que estaba pendiente de que se llevara a cabo nuevamente la inspección ocular en el inmueble objeto de la nulidad, como fue ordenado en auto del 20 de octubre de 2015 y además le fue indicado claramente que se haría como carga, responsabilidad o deber de la Inspección de Policía de programarle esa diligencia, en la que además insistió para su práctica en los escritos que posteriormente elevó, conjuntamente con su compañera de vida, controvirtiendo además en sus escritos otras decisiones que claramente se observa que no le fueron resueltas por parte del Despacho a cargo entonces del servidor público investigado.

Considera el Despacho que ni siquiera la decisión que adoptó el 02 de agosto de 2016 tuvo la virtualidad de impulso y conclusión de la actuación, resolviendo una situación accesoria sin permitir efectivamente a las partes conocerla y atacarla, lo que resulta ser una actuación ineficaz cuando no se observa que hubiere dirigido una comunicación escrita o realizado una notificación personal a las partes o a la interesada, dando cuenta de esa decisión.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

Se observa que el 05 de agosto de 2016 se desfijó el edicto de la ineficaz notificación, y si consideramos éste la última forma de impulso o intervención del Despacho en la actuación, no podía desconocer que en el punto segundo del dispone del auto del 02 de agosto de 2016, el servidor público indicó que contra aquél rechazo de plano de la solicitud de coadyuvancia, procedía el RECURSO DE REPOSICIÓN, y para ello debían correr los días de ejecutoria (tres días) en forma independiente al acto de la notificación, por lo que los días hábiles para su cómputo lo eran el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto de 2016, último día inclusive en que los interesados podían haber actuado.

Conforme a lo anterior, los diez (10) días hábiles de abandono requeridos para considerar que operaba la perención, debían computarse con posterioridad al 10 de agosto de 2016, con lo que de toda forma se desconocería que correspondía a la Inspección de Policía por tanto al servidor público, haber programado la fecha y hora de la diligencia de inspección ocular con perito que tenía prevista y ordenada desde el 20 de octubre de 2015.

Ello permite considerar carente de sustento y ajeno a la realidad procesal, que el proceso policivo hubiere permanecido inactivo desde el 22 de octubre de 2015, fecha que es referida en la decisión del 10 de agosto de 2016 como el momento de la última actuación del señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, constituyendo entonces esa actuación en la manifestación del incumplimiento del deber del servidor público de actuar en forma diligente y eficiente en el trámite y decisión del asunto, incurriendo en un abuso indebido del cargo.

Para este Despacho es claro que no se encuentra en el expediente de la Inspección de Policía, prueba alguna de haber sido impulsado el proceso de humedad programando la realización nuevamente de la inspección ocular, como se le indicó o hizo saber que se haría al interesado o interesados en fecha 20 de octubre de 2015, y específicamente al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR mediante el oficio No.289 del 20 de octubre de 2015 y ordenado en auto de la misma fecha.

Con su actuar el servidor público definitivamente incurrió injustificadamente en los comportamientos endilgados, lo que se desvirtúa como lo pretendió en sus descargos y alegatos de conclusión al sostener que la figura de la perención es aplicable, cuando para que proceda la norma y el deber funcional del funcionario, le imponen el deber de impulsar oficiosamente la actuación, como en efecto lo habían determinado en las decisiones del procedimiento, lo que no puede desconocer inclusive, ni lo hicieron, quienes rindieron sus declaraciones.

Los comportamientos disciplinables en que incurrió el servidor público, no los justifica el hecho de que el interesado hubiere acudido a la acción de tutela como mecanismo de defensa que finalmente fue denegada por improcedente, y menos lo justifica el hecho de que para la negación de la tutela, hubiere sostenido la decisión judicial que si el accionante no estaba de acuerdo con la actuación desplegada por la Inspección de Policía, debió interponer los recursos previstos en el Código Departamental de Policía



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

y Convivencia Ciudadana, ya que si observamos el contenido de decisión adoptada en el auto del 10 de agosto de 2016 como perención, el funcionario que la expidió indicó en el punto cuarto del resuelve que contra la decisión que declaraba la perención, no procedía recurso alguno; y si se considera que dicha decisión judicial indicó que el medio de control idóneo contra esa decisión eran las acciones contencioso administrativas de nulidad y restableciendo ante la respectiva jurisdicción, es claro que conforme al artículo 2 inciso 2 del CPACA, las disposiciones de la primera parte de esa norma, no se aplican a los procedimientos de policía que por su naturaleza requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas; y además de ello, el artículo 105 ibídem consagra la siguiente excepción de ese medio de control: *“3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”*.

En cuanto a las explicaciones que el propio servidor público investigado brindó en sus descargos y en los alegatos de conclusión, el Despacho no los comparte toda vez que son ajenos a la realidad y legalidad del trámite aplicado en este asunto.

Tanto la solicitud de nulidad y la recusación, como los recursos que en su oportunidad invocó el servidor público, ya fueron resueltos.

En torno a las argumentaciones de haberse actuado con temeridad, mala fe, contrariando o violando la ley, el Despacho no lo considera así, teniéndose como apreciaciones subjetivas de su parte que no encuentran soporte ni se reflejan en las actuaciones surtida.

Considera el Despacho que el servidor público desconoce que de acuerdo con la información que consta en el expediente, las pruebas o información que se ordenó recaudar mediante las indagaciones preliminares que en cada uno de los dos expedientes acumulados se había ordenado, no superaron los seis meses previstos en el artículo 150 de la ley 734 de 2002, ante lo cual se le indica al investigado que una cosa es el término de duración de la etapa de indagación preliminar, y otra cosa diferente es que la indagación preliminar no hubiere sido evaluada inmediatamente culminó en cada caso, o que para dicha evaluación hubiere transcurrido varios meses o años. Podrá observarse que en el caso del expediente con radicado No.647-16 en el que la indagación se ordenó en auto de fecha 19 de diciembre de 2017, el recaudo de prueba no superó los seis (6) meses siguientes, es decir, con posterioridad al 19 de junio de 2018 no se observa que se hubiere continuado la indagación, ni se hubiere recaudado más pruebas; en tanto que con relación al expediente con radicado No.068-17 de fecha 21 de marzo de 2017, tampoco se observa que la práctica de prueba o desarrollo de la indagación hubiere superado el plazo de seis meses que vencían al 21 de septiembre de 2017.

En el trámite de la evaluación de esos dos procesos, se determinó mediante el auto del 27 de julio de 2021 que debían ser acumulados para tramitarlos como uno solo, bajo la sustentación que allí se expuso.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

Considera el Despacho que no en modo alguno ha operó el fenómeno de la caducidad, ni el de la prescripción de la acción disciplinaria, cuando se tiene en cuenta que para efectos de la decisión de aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia adoptada el 27 de julio de 2021, se determinó como última fecha de los hechos al 26 de enero de 2017, y que finalmente se establecen al 13 de febrero de 2017 cuando el servidor público como Inspector de Policía dejó sin efecto las decisiones que había adoptado en el proceso de humedat, a esa fecha no transcurrieron los cinco (5) años previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que establece:

“ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.”

Por tanto, teniéndose como última fecha de los hechos el 13 de febrero de 2017, la caducidad de cinco años para proferir auto de apertura de investigación, se cumplía el 12 de febrero de 2022, y como consta en el expediente, la decisión que hace las veces de apertura de la investigación disciplinaria en el procedimiento verbal, se expidió el 27 de julio de 2021. Es decir, que la acción no estaba caduca, y contados los cinco años a partir de la fecha de dicho auto, hasta el momento no ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

Ya el Despacho se pronunció acerca del argumento de transcurso del tiempo y de la caducidad y prescripción, al resolverse la nulidad que invocó en la audiencia de descargos, por tanto, quien los alega de nuevo debe remitirse a lo explicado en esa decisión.

En cuanto a la omisión de etapas procesales que invocó el servidor público en sus alegatos, ello no es de recibo, toda vez que al parecer desconoce la diferencia que existe conforme a la ley 734 de 2002, entre el procedimiento ordinario y el procedimiento verbal, éste por el cual se encausó este asunto, atemperándose a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la ley 1474 de 2011, en la decisión a la que igualmente debe remitirse el servidor público, siendo que el procedimiento disciplinario tiene definidas solemnidades o ritualidades propias, que claramente se diferencian del procedimiento verbal aplicado.

En torno a la legalidad y aplicabilidad de la perención en los procesos policivos, como ya se dijo, sin entrar a definir jurídicamente si ello es posible, no desconoce el



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

Despacho el planteamiento del investigado y de los testigos que como Inspectores de Policía lo ratificaron; siendo que ello no es el objeto del sustento o fundamento de los cargos formulados, sino el hecho de haberse terminado el procedimiento policivo bajo esa figura, desatendiendo las condiciones que conforme a la mencionada norma se deben tener en cuenta para que ella sea aplicable, y precisamente es el que la parte interesada abandone realmente el proceso, es decir, que no cumpla con las cargas que le corresponden para que el procedimiento siga su curso y se concluya, o no asista a la práctica de las pruebas, y en modo alguno el servidor público como funcionario de policía puede desconocer que tenía el deber de impulsar oficiosamente la actuación, más cuando al interesado se le había notificado y comunicado que era el Despacho policivo el que programaría la realización de una nueva inspección ocular, y le notificaría de la fecha y hora de esa diligencia, además de los eventos y circunstancias que fueron indicados en precedencia, por lo que no se entiende ni se ha explicado por parte del servidor público, motivo alguno para no haber continuado el trámite del proceso policivo con las consecuencias que generó para los afectados o implicados en ese tema.

Si bien los medios de prueba testimonial que se recaudaron avalan la aplicación de la figura de la perención en los procesos de humedad, lo dicho por ello no se puede entender al margen o alejado de las exigencias previstas o que define el mencionado artículo 277 de la ordenanza 343 de 2012 que la estableció, y menos desconociendo el deber funcional que tenía el servidor público de impulsar el trámite y decisión del asunto de su competencia, lo que entonces era requisito sine qua non para poder considerar que el querellante no cumplió con alguna carga procesal que le hubiere sido impuesta, o no se presentó a la práctica de pruebas, y por tanto que hubiere abandonado el trámite procesal a su suerte, lo que en modo alguno se presentó en la actuación que le interesaba

En modo alguno se desconoce la autonomía de los Inspectores de Policía en la toma de decisiones en los asuntos de su competencia, siendo entonces que en sus actuaciones también están sometidos a los principios y garantías como el debido proceso y el derecho de defensa, y como parte de la función administrativa les corresponde atemperarse en sus actuaciones a los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución, y por tanto, se diligentes, imparciales y eficientes en el trámite de los asuntos de su competencia, sin trasladarle la responsabilidad o consecuencias en la omisión de esa carga a los administrados.

X. CARGOS PROBADOS:

Conforme a lo expuesto anteriormente resultan probados y no desvirtuados los siguientes cargos que fueron objeto de la decisión de citación a audiencia y aplicación del procedimiento verbal:

PRIMER CARGO PROBADO:

Considera el Despacho que el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

en el ejercicio de las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA SEGUNDA CATEGORÍA, dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, incumplió el deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, de impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedad No.1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No. 34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, cuando procedió a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016 en el que declaró la perención atribuyendo infundadamente el abandono del trámite policivo, situación que implicó que la problemática de humedad que constituía una contravención común, quedó sin decisión de fondo y por ende sin solución.

El servidor público en este caso no solo se alejó de la ritualidad prevista en el Decreto Municipal 1944 de 1997, sino que también se sustrajo al deber funcional que tenía según el Decreto Municipal No. 411.20.00062 del 23 de febrero de 2007, para resolver de fondo y en forma definitiva, la problemática de humedad que afectaba a dicho inmueble y por tanto a sus ocupantes.

SEGUNDO CARGO PROBADO:

Igualmente se considera definitivamente que el servidor público investigado incumplió el deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No.1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, relacionado con la humedad que se presentaba en el inmueble de la Diagonal 28C No.34-65 del Barrio El Paraíso de Cali, y que su comportamiento implicó un abuso indebido del cargo o función, toda vez que la decisión de archivo con la que concluyó el proceso, el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido o realizado alguna carga procesal, o que la falta de impulso o trámite del proceso le era atribuible a su abandono.

Era deber del servidor público actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad, dándole impulso al procedimiento policivo para resolverlo de manera definitiva o de fondo, como además le habían indicado al querellante que se haría.

No obstante tal determinación, al evaluar la adecuación típica de esos comportamientos, el Despacho podrá considerar su encuadramiento en el tipo de mayor riqueza descriptiva, como a continuación se analiza.

XI. NORMAS VIOLADAS Y TIPICIDAD DE LAS CONDUCTAS:

La Corte Constitucional en su sentencia C- 796 de 2004, con relación al principio de tipicidad sostuvo que constituye una concreción o derivación del principio de legalidad, que constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de todos los asociados al permitirles conocer de manera anticipada las conductas que son reprochables y las



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

sanciones aplicables.

Expresando además que: *«el ius puniendi del Estado sea reglado y sometido a los controles necesarios, es precisamente uno de los objetivos que persigue el Estado de Derecho, en cuanto representa la forma de garantizar la plena vigencia de los derechos y garantías de los potenciales encartados, erradicando así la arbitrariedad y el autoritarismo».*

Acorde con los compromisos propios de quien ejerce la función pública ha establecido la Ley 734 de 2002 en su artículo 23 que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 ibídem.

El artículo 6 de la Constitución Política, por su parte prevé que los servidores públicos serán responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Con fundamento en las precitadas disposiciones y de conformidad con el material probatorio allegado al presente disciplinario, se tiene que el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, con los comportamientos que resultaron probados y no desvirtuados, incurrió en la violación de la norma disciplinaria, y como ya se dijo considera que los comportamientos que comprenden cada uno de los cargos, están subsumidos o son el resultado de un solo comportamiento, como es el descrito en el cargo primero, ya que la falta al deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No. 1944-549, lo que pudo consistir en un abuso indebido del cargo o función, es el resultado de la falta al deber de impulsar, tramitar resolver dicho proceso, aplicando irregularmente la institución de la perención por abandono, de lo que carecía de sustento fáctico, dejando sin resolver una problemática que afectaba el saneamiento de un inmueble, constituía una contravención y generaba un conflicto entre los ocupantes del inmueble.

Por tanto, definitivamente se considera que el comportamiento del primer cargo en que queda subsumido el actuar del servidor público encuadra en las siguientes descripciones disciplinarias, que se indicaron al formularse la acusación:

La Ley 734 de 2002, que en su artículo 34 numeral 1º, establece lo siguiente:

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, (...) ...las leyes (...) los decretos (...).”



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

A su vez, la misma norma en su artículo 35 numeral 1º que establece:

"Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

"1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, (...) las leyes, los decretos, las ordenanzas, (...) y los manuales de funciones, (...)."

Estos tipos disciplinarios en blanco, debido a que el servidor público incurrió en la violación o incumplimiento de la ritualidad que era aplicable al proceso de humedad No. 1944-549, promovido por Jorge Enrique Londoño Cuellar contra Hernando Londoño Cuellar, atemperándose o conforme a la ritualidad prevista en el Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997, *"Por medio del cual se asignan unas funciones a las Inspecciones de Policía Municipal y Desarrollo Comunitario y se establecen los procedimientos para imponer medidas correctivas a los contraventores en los asuntos relacionados con las humedades en inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali"*, que le indicaban al servidor pública cuál era el procedimiento que debía aplicar en ese caso, y que al adoptar la decisión de perención y consiguiente archivo, con base en lo dispuesto en el artículo 277 del Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana, mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, sin tener en cuenta el requisito fáctico que exige esa disposición para aplicar la perención, dejando entonces el asunto sin resolver mediante la decisión de fondo, agotando del procedimiento dispuesto en el citado Decreto Municipal.

Así mismo, al no atender el deber funcional previsto en el manual específico de funciones previstos para el cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II, en el Decreto Municipal No.411.20.0062 del 23 de febrero de 2007, vigente a la fecha de los hechos, describía la siguiente función: *"Es responsable de recepcionar, tramitar y fallar sobre los asuntos que por competencia y jurisdicción le corresponden, conforme a las leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos, para garantizar los derechos, tranquilidad y seguridad de los miembros de la comunidad a la cual presta sus servicios. (...)"* y *"(...)5. Velar por el cumplimiento de las normas de policía vigentes; (...)."*

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN E ILICITUD SUSTANCIAL:

Definitivamente quedó probado que el servidor público investigado dejó de continuar adelantando el trámite del proceso de humedad, adoptando de manera infundada una decisión el 10 de agosto de 2016, que mantuvo con posterioridad a esa fecha, hasta el 13 de febrero de 2017, cuando so pretexto de cumplir la decisión de tutela de segunda instancia, dejó sin efectos decisiones del 12 de diciembre de 2016 y 31 de enero de 2017, que había expedido para impulsar la actuación llevando a cabo o programando la diligencia de inspección ocular que desde el 20 de octubre de 2015 se le había dicho al interesado que se haría, sin haber sido impulsado el trámite de su parte programando esa diligencia, quedando de esa forma inconcluso el procedimiento, irresoluta una problemática denunciada por un ciudadano, lo que generaba una



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

problemática para los sujetos procesales de esa actuación, y con ello, fueron vulnerados los principios que rigen para la función administrativa del Estado, previstos en el artículo 209 de la Constitución, y que se esperaba del servidor público que acatara en el cumplimiento de sus funciones:

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

En cuanto a la ilicitud sustancial del comportamiento, no encontró el Despacho justificación alguna para el comportamiento enrostrado en este cargo, en razón este probable comportamiento está provisto de ilicitud sustancial, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, que establece:

"ARTÍCULO 5o. ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna."

El comportamiento del servidor público afecta el deber funcional sin justificación alguna, constituye un abuso indebido del cargo o función, porque se espera que quien ejerza la función pública, en este caso de naturaleza policiva y relacionado con la preservación del orden público y el mantenimiento del statu quo, adopte sus decisiones de acuerdo con el sustento fáctico necesario, con la realidad, y que sus decisiones no sean infundadas o antojadizas, con apego a la ley y a las ritualidades, más si se trata de un servidor público con perfil profesional de abogado.

El servidor público debió ser diligente, eficiente e imparcial en impulsar, tramitar y resolver el proceso policivo, más cuando ya le habían informado al interesado que harían una nueva visita a su inmueble, generando la confianza y convicción de que esa decisión se cumpliría, y que se resolvería legalmente la humedad que afectaba un inmueble urbano.

A pesar de haber sido notificada esa decisión de perención al quejoso, y que éste lo pudo haber controvertido, no se puede desconocer que lo que esperaba el quejoso o el interesado en esa querella, era que se haría tal visita como se le había notificado e informado, y ello constituía una carga para el Despacho de impulsar el trámite, porque además así se lo indicaba el Decreto Municipal.

Dicho interesado consideró viable la tutela para resolver ese asunto, y a pesar de la decisión judicial de segunda instancia del Juez de tutela, no puede desconocerse que el sustento que invocan esas sentencias lo son solo para el fallo de la misma, por lo que no constituye la declaración o reconocimiento de la legalidad de la decisión de perención del servidor público.

XII. CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONDUCTA Y DE LA
RESPONSABILIDAD:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

El legislador disciplinario señala que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. En esta investigación, el disciplinado presuntamente actuó violando las disposiciones generales de cuidado, prudencia, diligencia, exigibles a cualquier servidor público que desempeñe el cargo del implicado.

De acuerdo con el acervo probatorio que conforma el expediente, el Despacho observa que el servidor público actuó de manera consiente y voluntaria frente al incumplimiento de la ley, la cual le imponía el deber específico de comportamiento y al mismo tiempo la prohibición, subsumido en una sola conducta que es la indicada en el primer cargo.

Queda claro que se presentó un evidente quebrantamiento del ordenamiento jurídico disciplinario, lo que a la postre, erosiona la confianza en la administración y el sentido de seguridad jurídica que debe reinar en la administración pública en el cumplimiento de los deberes funcionales.

En el auto por medio del cual se ordena la aplicación del procedimiento verbal y se cita a audiencia, se determinó que los dos comportamientos endilgados eran considerados provisionalmente como FALTAS GRAVES cometidas a título de DOLO.

Respecto del cargo que finalmente resulta probado y en el que se consideró que quedó subsumido el segundo, no existe para el Despacho duda o discusión alguna para ratificar dicha calificación en forma definitiva, acorde a los criterios que establece el artículo 43 de la ley 734 de 2002, como son: (1) el grado de culpabilidad, en atención a la naturaleza del cargo que es autoridad de policía, el perfil que requiere su ejercicio y la experiencia, (2) la naturaleza esencial del servicio, como es la competencia que tenía el servidor público como autoridad de policía, cuyas actuaciones son regladas y facultades por Constitución y por Ley, (4) la jerarquía y mando del servidor público, precisamente por ser autoridad de policía con competencia para preservar y mantener el orden público que resulta de la eliminación de las perturbaciones a la seguridad, tranquilidad, moralidad, salubridad y ornato público, en lo que prevalece el interés general sobre el particular, y como consecuencia de ello (5) la trascendencia social de los comportamientos, ya que se espera que la autoridad de policía ejerza sus funciones, facultades o atribuciones con apego a las normas de procedimiento, que son de orden público, y por tanto, de obligatorio y estricto cumplimiento.

En cuanto a la forma de responsabilidad se tiene que:

Las dos formas de culpabilidad admitidas en el derecho disciplinario son el dolo y culpa según lo dispone el artículo 13 de la ley 734 de 2002 y el sujeto agente puede hacerlo por acción u omisión.

El dolo es entendido como la voluntad dirigida conscientemente a la realización de una conducta reprochable, y para ser tenida como dolosa una falta disciplinaria, se requiere que el servidor público haya tenido conocimiento previo de que con su actuación se



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

violentaba un deber o mandato jurídicamente exigible.

No se puede desconocer que el servidor público ostentaba el perfil profesional de abogado, lo que permite asumir que tenía el conocimiento suficiente de saber cómo actuar y resolver un asunto que era de su competencia, y la ritualidad a la que debía atemperarse, y sin embargo no lo hizo, a pesar que pudo haber atendido o asumido esa competencia orientado inicialmente por la norma, y por la decisión del juez de tutela de primera instancia, que le obligó a dejar sin efecto la decisión, reprogramar la inspección ocular, sin concluir el procedimiento, solo por el hecho de que fue revocado el fallo de primera instancia en el trámite de la acción de tutela.

Finalmente el servidor público dejó sin resolver el asunto a fecha 13 de febrero de 2017, cuando expidió el auto de obediencia y cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia, dejando sin efectos los autos del 12 de diciembre de 2016 y del 31 de enero de 2017, sin razón o fundamento alguno.

En consecuencia, el comportamiento que determina el cargo probado, se califica definitivamente como FALTA GRAVE cometida a título de DOLO, sin haberse probado o establecido la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

XIII. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN:

En razón de los planteamientos esbozados, por estar probada plenamente la existencia de las conductas típicas, cuya responsabilidad se atribuye disciplinariamente al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, este Despacho así lo declarará. Luego, acorde con las estipulaciones dadas en el artículo 18 de la ley 734 de 2002 que consagra el principio de la proporcionalidad, previendo que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.

Debe tenerse en cuenta que las dos faltas que finalmente resultan probadas y no desvirtuadas, fueron calificadas definitivamente como a FALTAS GRAVES cometidas a título de DOLO, en razón de lo cual debe tenerse en cuenta que a ellas corresponde la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 2 de la ley 734 de 2002, donde la suspensión implica la separación en el ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquél por el término señalado en el fallo (Artículo 45 definición de las sanciones).

Según el artículo 46 ibídem, la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses, y la suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses, y en razón de los criterios dispuestos en el artículo 47, sobre los criterios para la graduación de la sanción, debe tenerse en cuenta que para el caso del investigado, concurren circunstancias atenuantes para imponer el mínimo permitido.

Por tanto, la sanción que se impondrá al servidor público será la de UN (1) MES de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

“POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16”

suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término.

XIV. DECISIÓN:

Sin más consideraciones, el Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía de Santiago de Cali,

RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE de los dos cargos que resultaron probados y no desvirtuados en el presente proceso disciplinario, al señor HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.623.237 expedida en Ciénaga, quien para la época de los hechos desempeñaba las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali, dependiente del organismo que actualmente se denomina SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA de la Alcaldía de Santiago de Cali; de conformidad con las explicaciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Artículo Segundo: Como consecuencia de esta declaración de responsabilidad, imponer al señor HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, identificado con la cédula de ciudadanía No.12.623.237 expedida en Ciénaga, quien para la época de los hechos desempeñaba las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali, dependiente del organismo que actualmente se denomina SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA de la Alcaldía de Santiago de Cali; la sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL, ambas por el mismo término de UN (1) MES, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Artículo Tercero: En cumplimiento de lo normado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, una vez quede ejecutoriado este fallo, remítase copia a la Oficina de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación para su respectivo registro y al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Municipio de Santiago de Cali, para que proceda a darle ejecución a la sanción en los términos establecidos por el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, otorgándole facultades a dicha dependencia u organismo para que realice la conversión de la suspensión en multa efectuando la respectiva liquidación y cobro por jurisdicción coactiva, en el evento en que el servidor público hubiere cesado en sus funciones para el momento de la ejecución del fallo o durante la ejecución del mismo, y no fuere posible ejecutar la sanción, por lo cual el término de suspensión impuesto o el que faltare por cumplir, se convertirá en salarios mínimos de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial..

Artículo Cuarto: Notificar en estrados el presente fallo de primera instancia al señor



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

RESOLUCIÓN No. (4124.010.21.020) DE 2022
(27 de abril de 2022)

"POR LA CUAL SE EMITE EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA EN
PROCEDIMIENTO VERBAL CON RADICACIÓN No. 647-16"

HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH.

Artículo Quinto: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en la audiencia del procedimiento verbal en que se le dará lectura, conforme al artículo 59 de la ley 1474 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días de abril de 2022

GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO
Director

Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno

Proyectó: Cristian Muñoz Insuasti - Contratista



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y los artículos 67, 76, 115 y 180 de la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único - CDU¹, procede a proferir la presente decisión.

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO E IDENTIDAD DEL DISCIPLINADO

| | |
|-----------------------------------|--|
| ASUNTO | RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN |
| APELANTE | HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH DISCIPLINADO |
| IDENTIFICACION | C. C. No. 12.623.237 expedida en Ciénaga (Magdalena) |
| CARGO DESEMPEÑADO | INSPECTOR DE POLICÍA URBANA CATEGORÍA II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE SANTIAGO DE CALI – PARA LA FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS |
| FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS | DE AGOSTO 10 DE 2016 |
| FALLO PRIMERA INSTANCIA | RESOLUCIÓN No. 4124.010.21.020 DEL 27 DE ABRIL DE 2022 |
| DECISION PRIMERA INSTANCIA | Consideró disciplinariamente responsable al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, por faltar al "deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No. 1944-549, lo que pudo consistir en un abuso indebido del cargo o función, es el resultado de la falta al deber de impulsar, tramitar resolver dicho proceso, aplicando irregularmente la institución de la perención por abandono, de lo que carecía de sustento fáctico, dejando sin resolver una problemática que afectaba el saneamiento de un inmueble, constituía una contravención y generaba un conflicto entre los ocupantes del inmueble(...)". Indicó la primera instancia que el investigado con su actuación, incumplió el deber contenido en el Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 e incurrió en la prohibición contemplada en el Artículo 35 numeral 1 ibídem, además de vulnerar las normas especiales, así: Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997 y Manual de Funciones, Decreto Municipal No.411.20.0062 del 23 de febrero de 2007. Calificó la Falta como Grave a |

¹ Norma aplicable al caso en razón del régimen de transición contemplado en la Ley 1965 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, "Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley."

Guay 20



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

| | |
|--|---|
| | título de Dolo e impuso una sanción de SUSPENSIÓN DEL CARGO DURANTE UN (1) MES E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO TÉRMINO. |
|--|---|

HECHOS

Mediante oficio radicado en la Alcaldía de Santiago de Cali, 20164124000592-2 del 2 de noviembre de 2016, la Personería de Santiago de Cali traslada al Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de este Municipio (DACDI), escrito de queja formulado por ANGELA TERESA MORENO (Folio 1-2) en contra de AMPARO RAMÍREZ MACÍAS y HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, en el cual pone en consideración los siguientes hechos (Folio 3 a 9):

"(...) queja por las actuaciones realizadas en el trámite de una querella por HUMEDADES radicado bajo el No. 1944-549 realizadas por los inspectores de policía de la Inspección Urbana de Policía II del barrio Nueva Floresta de esta ciudad (...)"

Relata la quejosa que su cónyuge presentó querella policiva el 22 de abril de 2014 ante la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta por humedades que se presentan en el primer piso del inmueble ubicado en la Diagonal 28 C No. 34-65 del Barrio El Paraíso, dirigida en contra de HERNANDO LONDOÑO CUELLAR. Manifiesta que el 6 de junio de 2014, se presenta escrito de adición de la querella con otras situaciones como el techamiento del patio que, en su consideración, afecta el primer piso.

Continúa su escrito de queja señalando que el 11 de junio de 2014 se celebra audiencia de conciliación que concluye como fracasada y el 8 de agosto del mismo año, se realiza visita ocular al inmueble que concluye con unas recomendaciones. Menciona que el 2 de octubre de 2015 su esposo, como querellante, presentó observaciones frente a la visita realizada, solicitando realizar nuevamente la diligencia.

El 9 de octubre de 2015 presenta escrito directamente la quejosa, coadyuvando la querella de su marido y el 20 de octubre de 2015 recibieron el oficio No. 289, en el cual la Inspectora Amparo Ramírez accede realizar nueva visita, quedando pendiente fijar fecha para la práctica de la diligencia.

El 22 de octubre de 2015 los querellantes solicitan a la inspección se pronuncie sobre las peticiones presentadas el 2, 8 y 9 de octubre de dicha anualidad, respecto a la coadyuvancia de la querella y los nuevos hechos adicionados, escrito reiterado el 18 de diciembre de 2015.

2
quy



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Expone que el 2 de agosto de 2016 la Inspección de Policía, en cabeza de HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, profiere el Auto No. 4161.2.24.027 en el cual rechaza de plano el escrito de coadyuvancia y el 10 de agosto de 2016, profiere el Auto No. 4161.2224.1-01 por el cual decreta la perención de la querella, decisión en contra de la cual no procede recursos y considera la quejosa no era procedente porque en el expediente estaban pendientes por resolver las siguientes peticiones: "a) Realización de nueva inspección ocular, b) el avocamiento de la perturbación en el uso y disfrute primer piso por techamiento del patio de la parte de delante, c) las fotocopias del expediente y d) la coadyuvancia de la suscrita."

Adicionalmente considera que las notificaciones de las actuaciones no se han surtido conforme al procedimiento establecido porque el Inspector notificó el mismo día que profiere la decisión de rechazar de plano la coadyuvancia, notificación por Edicto. Considera la quejosa que las actuaciones de los inspectores vulneran el procedimiento establecido en el Código Departamental de Policía y el Decreto Municipal 1944 de 1977.

Aporta como pruebas las siguientes piezas procesales del expediente No. 1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR, a saber:

| DOCUMENTO | FOLIO |
|---|---------|
| Escrito solicitud de inspección ocular del 22 de abril de 2014 | 10 a 14 |
| Citación de mayo 13 de 2014 expedida por la Inspección de Policía | 15 |
| Petición de copias fechada mayo 27 de 2014 | 16 y 17 |
| Solicitud de inspección ocular del 6 de junio de 2014. | 18 y 19 |
| Citación de junio 11 de 2014 | 20 |
| Acta diligencia de conciliación del 25 de junio de 2014 | 21 a 22 |
| Acta diligencia de inspección ocular del 8 de agosto de 2014 | 23 |
| Solicitud aclaración de visita ocular del 2 de octubre de 2015 | 24 a 25 |
| Solicitud del 8 de octubre de 2015, pronunciamiento sobre petición del 2 de abril de 2014 y copia del expediente | 26 |
| Escrito del 9 de octubre de 2015 presenta petición coadyuvancia de la querella | 27 a 28 |
| Oficio No. 289 del 20 de octubre de 2015 remitido por la Inspección de Policía en el cual atiende las peticiones del 2, 8 y 9 de octubre de 2015, indica que se realizará nueva inspección ocular | 29 y 30 |
| Petición del 22 de octubre de 2015 los querellantes solicitan pronunciarse frente a solicitud del 9 de octubre de 2015 referida a | 31 a 33 |



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

| | |
|---|---------|
| la coadyuvancia | |
| Escrito del 14 de diciembre de 2015 reitera petición coadyuvancia | 34 a 35 |
| Auto No. 4161.2.24.027 del 2 de agosto de 2016 rechaza de plano solicitud de coadyuvancia, se fija edicto en lugar visible para notificar la decisión con fecha de fijación 2 de agosto de 2016 y desfija el 5 de agosto de 2016 | 36 a 37 |
| Auto interlocutorio No. 4161.2.24.1-01 del 10 de agosto de 2016 decreta la perención del proceso, indicando que la última actuación del querellante correspondió a octubre 22 de 2015, decisión no susceptible de recursos, notificada a la parte el 17 de agosto de 2016 | 38 a 39 |

Por otra parte, el JUZGADO DÉCIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE CALI, mediante el Oficio No. 106 del 19 de enero de 2017 (folio 106) comunicó la decisión adoptada en Auto de Sustanciación No. 021, dentro del trámite de incidente de desacato al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela No. 145 del 07 de diciembre de 2017, expedida dentro del trámite de la acción de tutela adelantada bajo radicación No. 2016-00261-00, promovida por el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, en la que se había ordenado tutelar los derechos al debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia y defensa, ordenándole al servidor público que dejara sin efecto alguno el Auto Interlocutorio No. 4161.2.24.1.01 del 10 de agosto de 2016, y que en su lugar, procediera a fijar fecha para que se llevara a cabo la inspección ocular en los términos en que se había informado que se haría, mediante el oficio No. 289 del 20 de octubre de 2015 dirigido al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, actuación que dio inicio al expediente disciplinario con radicación No. 068-17.

ANTECEDENTES PROCESALES Y PRUEBAS

*Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-4187 del 19 de diciembre de 2017 ordena apertura de -indagación preliminar del expediente radicado 647-16 y decreta la práctica de pruebas, folio 40-41

*Acta del 25 de enero de 2018 notifica personalmente a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH del contenido del Auto de Apertura de indagación preliminar, folio 49.

*Notificación por Edicto a AMPARO RAMIREZ MACIAS, fijado el 9 de febrero de 2018, folio 50.

*Diligencia de versión libre y espontánea rendida por HUGUES OTHON OLIVELLA

4
H
G
O
L
O
L
I
V
E
L
L
A
/



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

SAURITH el 10 de abril de 2018, folio 79 a 81.

*Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1617 del 27 de julio de 2021 dispone acumular el proceso 068-17 al 647-16, folio 102 a 103.

Piezas procesales proceso 068-17:

Oficio 201741610500000444 del 26/01/2017 por el cual traslada solicitud de investigación disciplinaria por incidente de desacato, se aporta como soportes la comunicaciones y decisiones proferidas por el despacho judicial, folio 104 a 114.

Oficio No. 450 del 14 de febrero de 2017 por medio del cual el Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Cali, comunica la decisión de ABSTENERSE de continuar trámite de desacato, folio 115-117.

Auto No. 4124.0.10.9.13-068-16-569 del 14 de febrero de 2017 asignación expediente, folio 118.

Auto No. 4124.0.10.9.13-068-16-1143 del 21 de marzo de 2017 inicia indagación preliminar expediente 068-17, folio 119

*Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1618 del 27 de julio de 2021 dispone aplicación del procedimiento verbal y cita a audiencia a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITF, entre otras decisiones, dispone desvincular del proceso a AMPARO RAMIREZ MACIAS, folio 334 a 349. Decisión notificada en forma personal al investigado el 10 de agosto de 2021, acta visible a folio 353.

*Escrito presentado por el investigado, radicado 202141610500059824 del 15 de agosto de 2021, por medio del cual solicita trasladar el expediente a la Personería Distrital de Santiago de Cali por poder preferente, folio 361 a 367.

*Escrito presentado por el investigado, radicado 202141730102278612 del 26 de agosto de 2021, solicita declarar nulidad del Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1618 del 27 de julio de 2021 y disponga el archivo del proceso, folio 368 a 372.

*Escrito presentado por el investigado, radicado 202141610500067884 del 11 de octubre de 2021, presenta queja disciplinaria en contra del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno, folio 377 a 379.

*Oficio presentado por el investigado, radicado 202141730102593972 del 8 de octubre

5
GMEU



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21. *CASO DE 2022*

(*Agosto 3*)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

de 2021, dirigido a SAUL HERNEY MUÑOZ VARGAS, a quien informa sobre queja disciplinaria radicada en su contra y solicita declararse impedido dentro del proceso para actuar, folio 380.

*Oficio radicado 202141240100070751 del 11 de octubre de 2021, suscrito por el Director del DACDI y remitido a la Personería Distrital de Santiago de Cali, solicita información acerca de decisión de poder disciplinario preferente requerida por el investigado, folio 381.

*Mediante oficio radicado 202141730102634712 del 15 de octubre de 2021, por medio del cual la Personería Distrital de Santiago de Cali, emite concepto negativo frente a la solicitud de ejercicio del poder preferente efectuada por el investigado, folio 385 a 387.

*Escrito del 15 de octubre de 2021, radicado 202141730102635562, solicitud presentada por el investigado para que se declare impedimento por parte de SAUL HERNEY MUÑOZ, folio 388 a 391.

*Audiencia primera del 13 de diciembre de 2021, procede lectura del Auto que ordena aplicar proceso verbal, formulación de cargos y citación a audiencia. El investigado presenta sus argumentos de defensa, solicita nulidad por incumplimiento de los términos previstos en la Ley 734 de 2002, plantea caducidad y prescripción de la acción disciplinaria, petición que es negada por el operador disciplinario, folio 394 a 399 – Grabación audiencia.

*Audiencia del 2 de febrero de 2022 prevista para práctica de pruebas, el investigado solicita resolver solicitud de impedimento en contra de SAUL HERNEY MUÑOZ VARGAS, contratista del DACDI, petición que es rechazada. El investigado presenta solicitud de nulidad por no dar trámite a petición de impedimento, pide al operador disciplinario GUSTAVO ARBOLEDA declararse impedido y adicionalmente, la intervención del Ministerio Público en las restantes audiencias. El despacho rechaza petición de nulidad, no se acepta la causal de impedimento invocada y concede recurso de apelación frente a la decisión, folio 407 a 411 y grabación de la audiencia.

*Mediante oficio 112 del 26 de enero de 2022, el Juzgado 14 Civil Municipal de Cali, comunica que ha concedido impugnación de la sentencia proferida el 17 de enero de 2022, dentro del trámite de acción de tutela interpuesta por HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH en contra del Director del DACDI de Santiago de Cali, en la cual decidió negar la acción de tutela, folio 419 a 429.

*Sentencia de Segunda Instancia No. 9 del 17 de febrero de 2022, proferida por el



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad de Santiago de Cali, en la cual confirma la sentencia impugnada, folio 430 a 434.

*Resolución No. 4112.010.21.0003 del 1 de marzo de 2022, por medio de la cual el señor Alcalde de Santiago de Cali, decide declarar infundada petición de recusación interpuesta por el investigado en contra de GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO, Director del DACDI, en consecuencia no separa al funcionario del conocimiento del proceso, folio 438 a 445.

*Audiencia del 25 de marzo de 2022, práctica de pruebas, recepción testimonio de PATRICIA INES CORINA ROJAS y ANGEL MARIA NAVIA QUINTERO, el investigado desiste del testimonio de PEDRO JOSE PEREZ SEHUANES, folio 459 a 461 y grabación de la audiencia.

*Audiencia del 1 de abril de 2022 para recepción de alegatos de conclusión en primera instancia, folio 463 a 478.

*Audiencia del 27 de abril de 2002 para lectura del fallo disciplinario de primera instancia, presentación y sustentación recurso de apelación, el cual fue concedido por el operador disciplinario, folio 479 a 511 y grabación de la misma.

*Oficio 202241240100009214 del 2 de mayo de 2022 remite expediente al Despacho del Alcalde para trámite recurso de apelación, folio 512.

TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA

*Escrito radicado 202241240100009604 del 12 de mayo de 2022, el investigado solicita nulidad de lo actuado por pretermisión de los términos contemplados en la Ley 734 de 2002, 513 a 524.

*Auto No. 01 de junio 8 de 2022 ordena correr traslado a la parte investigada para presentar alegatos de conclusión, decisión notificada por estados el 9 de junio del año en curso. En la oportunidad procesal, el investigado presentó escrito de alegatos, oficio radicado 202241730100939262 del 13 de junio de 2022, folio 525 a 540.

PRUEBAS DOCUMENTALES:

-Oficio 201841610500003104 del 5 de febrero de 2018, el Inspector de Policía Nueva Floresta remite copia del expediente 1944-549, folio 42 a 43.

A
Gmar



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.000 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

-Oficio 201841370400011004 del 12 de febrero de 2018 por el cual el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional remite información laboral de los implicados (Folio 51), así:

-Decreto 0762 del 5 de septiembre de 1985 por medio del cual se efectúa el nombramiento de AMPARO RAMÍREZ MACIAS en el cargo de Inspectora de Policía y Acta de Posesión del 13 de septiembre de 1985, folio 52 – 53.

-Resolución No. 4137.040.21.0884 del 9 de junio de 2017 por medio de la cual reconoce cesantías definitivas, folio 54-58.

-Decreto 411.0.20.0517 del 27 de junio de 2012 por medio del cual se nombra en período de prueba a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH en el cargo de Técnico Operativo de la Secretaría de Gobierno y Acta de posesión del 16 de agosto de 2012, folio 59 a 61.

-Resolución No. 4122.0.21.073 del 29 de enero de 2016 por medio del cual se encarga a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH en el cargo de profesional universitario, folio 59 a 64. Acta de posesión del 3 de febrero de 2016, folio 67.

-Manual de Funciones, Decreto 411.20.0062 de 2007, cargo Profesional Universitario, Inspector de Policía Urbano Segunda Categoría, folio 66 – 68.

El investigado en su versión libre y espontánea aportó los siguientes medios de prueba:

-Auto No. 461.2.24.042 del 12 de diciembre de 2016 por medio del cual se deja sin efecto la decisión que decreta la perención del proceso y dispone realizar nuevamente inspección ocular, como resultado de orden impartida a través de acción de tutela, folio 82.

-Oficio 20174173020-012485-2 proviene del Juzgado Doce Civil del Circuito comunica sentencia 024 del 7 de febrero de 2017 por la cual "REVOCA" sentencia No. 145 del 7 de diciembre de 2016 y niega acción de tutela, folio 83.

-Oficio No. 450 del 14 de febrero de 2017 por medio del cual el Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Cali, comunica la decisión de ABSTENERSE de continuar trámite de desacato, folio 84 – 87.

-Oficio No. 6872 del 26 de abril de 2017 comunica el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, sobre admisión acción de tutela presentada por JORGE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, vinculación al trámite de acción de tutela a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, escrito de tutela, folio 88 a 92.

-Oficio No. 7387 del 10 de mayo de 2017 comunica providencia del 8 de mayo de 2017 por la cual decide denegar la acción de tutela interpuesta por JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, folio 93.

-Copia Ordenanza 343 de 2012, Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca, artículo 274 a 316, folio 94 a 97.

-Copia Decreto Municipal No. 1944 del 20 de noviembre de 1997, folio 98 a 101.

PRUEBA TESTIMONIAL

-Declaración juramentada rendida por JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, Acta del 10 de abril de 2018, querellante en el proceso policivo No. 1944-549 de la Inspección de Policía y accionante de la acción de tutela interpuesta, folio 77 y 78.

-Diligencia de testimonio rendido por PATRICIA INÉS CORINA ROJAS CÁCERES, quien en audiencia informó sobre la aplicación de la perención y su viabilidad en los procedimientos por humedad en las condiciones previstas en la norma policiva departamental, en su calidad de Inspectora de Policía. Audiencia del 25 de marzo de 2022.

-Declaración juramentada rendida por ANGEL MARÍA NAVIA QUINTERO, quien en su calidad de Inspector de Policía, se refirió igualmente sobre la viabilidad y legalidad en la aplicación de la perención en los procesos de humedad. Audiencia del 25 de marzo de 2022.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante Fallo contenido en la Resolución No. 4124.010.21.020 del 27 de abril de 2022, proferido en audiencia de la misma fecha, según consta en la respectiva acta, el Director del DACDI de Santiago de Cali encontró disciplinariamente responsable al servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, INSPECTOR DE POLICÍA URBANA SEGUNDA CATEGORÍA dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.

La primera instancia encontró probados los siguientes hechos:

"(...) De acuerdo con la queja y los elementos de prueba recaudados, los hechos motivo de la inconformidad de la quejosa y de la acción de tutela en mención, están relacionados con el procedimiento policivo que consta en el expediente que se identificó en la Inspección de Policía Urbana de Segunda

9
Gua



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Categoría con sede en el Barrio La Nueva Floresta con el número de radicación No. 1944-549, correspondiente a un PROCEDIMIENTO POLICIVO DE HUMEDAD, (...).

A la investigación disciplinaria se allegó la copia del mencionado expediente, en el cual consta el trámite, actuaciones y decisiones adoptadas, lo que claramente permite a este Despacho determinar que el procedimiento policivo o ritualidad debía atemperarse a la reglamentación especial consagrada en el Decreto Municipal No. 1944 del 20 de noviembre de 1997, *"Por medio del cual se asignan unas funciones a las Inspecciones de Policía Municipal y Desarrollo Comunitario y se establecen los procedimientos para imponer medidas correctivas a los contraventores en los asuntos relacionados con las humedades en inmuebles ubicados en jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali"*. (...)

Según la queja disciplinaria de la señora ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ, hacía dos años, tres meses y diecinueve días se había instaurado la querella policiva que originó ese proceso, y que solo la servidora pública AMPARO RAMÍREZ MACÍAS, adelantó actuaciones en el curso de proceso, hasta quedar en espera de llevarse a cabo una nueva visita o inspección ocular en el inmueble ya mencionado; pero que habiendo asumido su conocimiento el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, quien relevó a su predecesora, lo único que hizo fue expedir un auto de fecha 2 de agosto de 2016 en el que resolvió rechazar la solicitud de coadyuvancia reclamada entre los compañeros permanentes ÁNGELA TERESA MORENO HERNÁNDEZ y JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, desconociendo que eran interesados en el resultado del procedimiento policivo, notificando esa decisión por edicto el mismo día en que la expidió, sin efectuar la notificación personal a los interesados; y que luego expidió el auto interlocutorio No.4161.2.24.1-01 del 10 de agosto de 2016, decretando la perención de la querella argumentando que *"(...) hasta la fecha las partes no han realizado actuación para que continúe el curso del proceso, siendo ésta última por el querellante, el 22 de octubre de 2015"*.

(...)

A fecha 10 de agosto de 2016 el servidor público expidió auto en el cual decretó la perención del procedimiento por abandono de las partes, al haber dejado transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de las que les correspondía para que el negocio continuara su curso o no asistir a la práctica de las pruebas solicitadas. Con ello ordenó el archivo del expediente, notificando la decisión de los señores Jorge Enrique Londoño y Hernando Londoño.

Consta entonces que el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR promovió la acción de tutela en contra del servidor público investigado, que tramitó en primera instancia el Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, el cual expidió la sentencia No.145 del 7 de diciembre de 2016 ordenando dejar sin efecto la decisión del funcionario adoptada en el auto de fecha 10 de agosto de 2016, por violación al debido proceso en conexidad con el acceso a la justicia y defensa, ordenándole que en las 48 horas siguientes el funcionario programara la práctica de la diligencia de inspección ocular, como se le había indicado y respondió al señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, mediante el oficio No.289 del 20 de octubre de 2015.

(...)

Consta entonces que con fecha 31 de enero de 2017 el señor HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH como Inspector de Policía, expidió auto fijando la fecha del 24 de febrero de 2017 a las 9:00 a.m., para llevar a cabo la Inspección Ocular, contactando para ello a la Ingeniera Luz Amparo Zapata, librándose las citaciones y realizándose las notificaciones personales a los señores JORGE ENRIQUE LONDOÑO y HERNANDO LONDOÑO.

Se allegó al expediente policivo la copia del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito en Oralidad de Cali, proferido en sentencia No.24 del 7 de febrero de 2017, en la



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

**"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"**

que se resolvió revocar el fallo de tutela de primera instancia, negando la acción de tutela que invocó el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR.

Con base en dicha decisión el servidor público expidió el auto de fecha 13 de febrero de 2017, en el cual resolvió dejar sin efectos su decisión contenida en el auto No.4161.2.24.042 del 12 de diciembre de 2016 y el auto del 31 de enero de 2017, decisión que notificó personalmente a los interesados.

El incidente de desacato que se había iniciado por el Juez de la instancia ante el incumplimiento de la orden de tutela, fue archivado con fecha 14 de febrero de 2017. (...)"

Señaló el operador disciplinario sobre la adopción de la perención en el procedimiento policivo objeto de investigación, que:

"(...) Sin entrar el Despacho a definir acerca de si viable o no la aplicación de esa institución en los procedimientos de humedad específicamente regulados por la disposición municipal, y su naturaleza jurídica; y de considerarle aplicable acorde a lo sostenido por el investigado y por los declarantes, no puede desconocerse los requisitos o condiciones que se requieren para su aplicación, y es el precisamente dejar la parte interesada transcurrir más de diez (10) días hábiles, sin hacer ninguna gestión de las que le corresponden para que el negocio continúe su curso o no asista la práctica de las pruebas que solicitó. (...)"

Por ello, en el caso que nos ocupa el reproche disciplinario ha sido el incumplimiento del deber funcional de impulsar, tramitar y resolver el proceso de humedad, que se procedió a archivar injustificadamente cuando se adujo que la parte querellante no había realizado impulso procesal alguno de la actuación policiva, desconociendo que estaba pendiente de que se llevara a cabo nuevamente la inspección ocular en el inmueble objeto de la nulidad, como fue ordenado en auto del 20 de octubre de 2015 y además le fue indicado claramente que se haría como carga, responsabilidad o deber de la Inspección de Policía de programarle esa diligencia, en la que además insistió para su práctica en los escritos que posteriormente elevó, conjuntamente con su compañera de vida, contravirtiendo además en sus escritos otras decisiones que claramente se observa que no le fueron resueltas por parte del Despacho a cargo entonces del servidor público investigado.

Considera el Despacho que ni siquiera la decisión que adoptó el 02 de agosto de 2016 tuvo la virtualidad de impulso y conclusión de la actuación, resolviendo una situación accesoría sin permitir efectivamente a las partes conocerla y atacarla, lo que resulta ser una actuación ineficaz cuando no se observa que hubiere dirigido una comunicación escrita o realizado una notificación personal a las partes o a la interesada, dando cuenta de esa decisión.

Se observa que el 05 de agosto de 2016 se desfijó el edicto de la ineficaz notificación, y si consideramos éste la última forma de impulso o intervención del Despacho en la actuación, no podía desconocer que en el punto segundo del dispone del auto del 02 de agosto de 2016, el servidor público indicó que contra aquél rechazo de plano de la solicitud de coadyuvancia, procedía el RECURSO DE REPOSICIÓN, y para ello debían correr los días de ejecutoria (tres días) en forma independiente al acto de la notificación, por lo que los días hábiles para su cómputo lo eran el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto de 2016, último día inclusive en que los interesados podían haber actuado.

Conforme a lo anterior, los diez (10) días hábiles de abandono requeridos para considerar que operaba la perención, debían computarse con posterioridad al 10 de agosto de 2016, con lo que de toda forma se desconocería que correspondía a la Inspección de Policía por tanto al servidor público, haber programado la fecha y hora de la diligencia de inspección ocular con perito que tenía prevista y ordenada desde el 20 de octubre de 2015.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Ello permite considerar carente de sustento y ajeno a la realidad procesal, que el proceso policivo hubiere permanecido inactivo desde el 22 de octubre de 2015, fecha que es referida en la decisión del 10 de agosto de 2016 como el momento de la última actuación del señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, constituyendo entonces esa actuación en la manifestación del incumplimiento del deber del servidor público de actuar en forma diligente y eficiente en el trámite y decisión del asunto, incurriendo en un abuso indebido del cargo.

(...)"

El Despacho evaluó que: "... en modo alguno ha (sic) operó el fenómeno de la caducidad, ni el de la prescripción de la acción disciplinaria, cuando se tiene en cuenta que para efectos de la decisión de aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia adoptada el 27 de julio de 2021, se determinó como última fecha de los hechos al 26 de enero de 2017, y que finalmente se establecen al 13 de febrero de 2017 cuando el servidor público como Inspector de Policía dejó sin efecto las decisiones que había adoptado en el proceso de humedades, a esa fecha no transcurrieron los cinco (5) años previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Respecto a los términos de la actuación procesal, el operador disciplinario señaló: "Considera el Despacho que el servidor público desconoce que de acuerdo con la información que consta en el expediente, las pruebas o información que se ordenó recaudar mediante las indagaciones preliminares que en cada uno de los dos expedientes acumulados se había ordenado, no superaron los seis meses previstos en el artículo 150 de la ley 734 de 2002, ante lo cual se le indica al investigado que una cosa es el término de duración de la etapa de indagación preliminar, y otra cosa diferente es que la indagación preliminar no hubiere sido evaluada inmediatamente culminó en cada caso, o que para dicha evaluación hubiere transcurrido varios meses o años. Podrá observarse que en el caso del expediente con radicado No.647-16 en el que la indagación se ordenó en auto de fecha 19 de diciembre de 2017, el recaudo de prueba no superó los seis (6) meses siguientes, es decir, con posterioridad al 19 de junio de 2018 no se observa que se hubiere continuado la indagación, ni se hubiere recaudado más pruebas; en tanto que con relación al expediente con radicado No.068-17 de fecha 21 de marzo de 2017, tampoco se observa que la práctica de prueba o desarrollo de la indagación hubiere superado el plazo de seis meses que vencían al 21 de septiembre de 2017."

En tal contexto, encontró acreditados probatoriamente los siguientes cargos:

"PRIMER CARGO PROBADO:

Considera el Despacho que el servidor público HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH en el ejercicio de las funciones del cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA SEGUNDA CATEGORÍA, dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, incumplió el deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, de impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedades No.1944-549, en que eran parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR (...) cuando procedió a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016 en el que declaró la perención atribuyendo infundadamente el abandono del trámite policivo, situación que implicó que la problemática de humedades que constituía una contravención común, quedó sin decisión de fondo y por ende sin solución.

(...)

SEGUNDO CARGO PROBADO:

Igualmente se considera definitivamente que el servidor público investigado incumplió el deber funcional de actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente No.1944-549, en que eran



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

parte querellante el señor JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR e infractor HERNANDO LONDOÑO CUELLAR (...) y que su comportamiento implicó un abuso indebido del cargo o función, toda vez que la decisión de archivo con la que concluyó el proceso, el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016, carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido o realizado alguna carga procesal, o que la falta de impulso o trámite del proceso le era atribuible a su abandono (...)"

La primera instancia consideró que el investigado con su actuación, incumplió el deber contenido en el Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 e incurrió en la prohibición contemplada en el Artículo 35 numeral 1 ibídem, además de vulnerar las normas especiales, contenidas en el Decreto Municipal 1944 del 20 de noviembre de 1997 y Manual de Funciones, Decreto Municipal No.411.20.0062 del 23 de febrero de 2007.

Expresó el *A quo* en su decisión, respecto a la ilicitud sustancial de la conducta, que: "El comportamiento del servidor público afecta el deber funcional sin justificación alguna, constituye un abuso indebido del cargo o función, porque se espera que quien ejerza la función pública, en este caso de naturaleza policiva y relacionado con la preservación del orden público y el mantenimiento del statu quo, adopte sus decisiones de acuerdo con el sustento fáctico necesario, con la realidad, y que sus decisiones no sean infundadas o antojadizas, con apego a la ley y a las ritualidades, más si se trata de un servidor público con perfil profesional de abogado. (...)"

Dicho interesado consideró viable la tutela para resolver ese asunto, y a pesar de la decisión judicial de segunda instancia del Juez de tutela, no puede desconocerse que el sustento que invocan esas sentencias lo son solo para el fallo de la misma, por lo que no constituye la declaración o reconocimiento de la legalidad de la decisión de perención del servidor público...."

Por lo expuesto, calificó la Falta como Grave a título de Dolo e impuso una sanción de SUSPENSIÓN DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DE CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO TIEMPO.

RECURSO DE APELACIÓN

El investigado en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción presentó recurso de apelación en contra del proveído emitido por la primera instancia, el cual sustentó en audiencia con los siguientes argumentos (Grabación a partir del minuto 1:29:13), a saber:

Por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales emitidos por las altas cortes, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, las cuales citó e invocó para sustentar su argumento de que en el proceso ha ocurrido el fenómeno de la prescripción; por cuanto han transcurrido más de cinco años desde la fecha de la conducta que se investiga, sin que el operador disciplinario haya decidido de fondo o con fallo en el proceso.

Expone que si bien invocó dicho argumento en la petición de nulidad, considera que es viable insistir en esta figura de prescripción, por cuanto, si bien no está de acuerdo con que decretar la perención en el proceso policivo constituya falta disciplinaria, por cuanto



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

dicha figura es procedente dentro del trámite, tal como lo ilustraron los testigos citados que ejercen como Inspectores de Policía Urbanos, la fecha de la decisión fue el 10 de agosto de 2016 y a Él como investigado, sólo le fue notificado el inicio de la investigación disciplinaria el 10 de agosto de 2021, habían transcurrido cinco (5) años y el proceso prescribió, por lo cual no tendría competencia para sancionar el Despacho.

El disciplinado señala que hace lectura de las sentencias de las altas cortes, las cuales están identificadas en el escrito de alegatos y solicita a la segunda instancia revisar en detalle dichos proveídos, reiterando que aun teniéndose como fecha la indicada en el fallo 13 de febrero de 2017, a la fecha abril 13 de 2022, ya han transcurrido más de cinco (5) años y por tanto, considera que el despacho ha desconocido las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y Corte Constitucional, señalando que la jurisprudencia ha sido constante en su interpretación, incluso después de la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011 al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, frente a la forma de contabilizar los términos de prescripción y la consecuencia de la misma, referida a la pérdida de competencia para decidir.

En tal sentido, considera que la decisión es contraria a la Ley debido a que en el proceso ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, por lo cual, expresa que presentará denuncia penal en contra del funcionario de conocimiento y de los intervinientes en la proyección del fallo.

Invoca entre sus argumentos de derecho, la sentencia del Tribunal Contencioso del Cauca, radicado 19001-23-33-003-2013-00679-00, en la cual se cita que la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, para impedir que los acusados, permanezcan largo tiempo bajo acusación.

Conforme a la sentencia antes referida solicitó aplicar la prescripción y el principio de favorabilidad, porque la Ley 1955 de 2019, frente a la figura de la prescripción y el cómputo de los términos previstos en la reforma, reitera que la acción disciplinaria prescribe a los cinco (5) años de la ocurrencia de los hechos o conducta disciplinable, sin que se hubiera decidido de fondo o emitido decisión, como ocurre en su caso, en donde la decisión que se reprocha fue emitida el 10 de agosto de 2016 y por tanto, a la fecha ha prescrito la acción.

Expone adicionalmente, que en el proceso disciplinario se presentan errores sustanciales, por cuanto el auto de aplicación de proceso verbal, se sustenta en el valor probatorio y el alcance que el despacho otorga al oficio 289 del 20 de octubre de 2015, pero señala que este documento es inexistente porque la decisión no fue firmada por la funcionaria, adicionalmente, ese documento es una comunicación pero no una decisión, como se insiste en la decisión del fallo, sin considerar que la inspección ocular fue realizada en su oportunidad, acompañada por perito profesional que emitió un concepto y en la oportunidad procesal las partes no presentaron objeciones al informe emitido por



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

la perito, por lo cual el acta adquirió firmeza y la solicitud de aclaración presentada por el querellante era extemporánea; por tanto, no era válido que la Inspectora antecesora emitiera esa comunicación de realizar nueva visita, sin emitir ninguna decisión o acto administrativo.

Manifiesta que el Auto que dio inicio al proceso verbal y el fallo de responsabilidad disciplinaria, sustentan la decisión de que en el proceso policivo estaban pendientes de atender otras solicitudes, pero al respecto, expresa el recurrente que la esposa del querellante es abogada y que a pesar del conocimiento que tenía, presentó dentro del proceso policivo peticiones no relacionadas al objeto del mismo (humedades), sino que interpuso escritos diferentes como techamiento, etc.

El proceso policivo tuvo varios momentos de inactividad procesal, con períodos de 15 meses sin impulso y el último con más de 200 días de inactividad, señalando que la Ordenanza 343 de 2012 en su artículo 277 sólo exige 10 días de inactividad, por tanto, en el caso en concreto era viable adoptar la decisión de perención.

Considera el recurrente que el proceso disciplinario no ha cumplido con todas las etapas procesales y no se cumplió el trámite previsto en el Código Disciplinario, respecto a los términos de las diferentes etapas e incumplieron el principio de celeridad en el trámite del proceso, por lo cual considera que no es viable exigir el cumplimiento del deber funcional, cuando en la investigación disciplinaria se superaron los términos para impulsar el proceso, indicando que la indagación preliminar se extendió por más de los seis meses establecidos en la Ley.

El investigado a través de escrito radicado 202241240100009604 del 12 de mayo de 2022, presentó solicitud de nulidad y archivo del proceso disciplinario, en el cual reiteró sus argumentos del recurso de apelación, respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial por parte del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno frente a la aplicación de la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, la cual considera aplica en este caso y por ende la sanción se emitió sin tener competencia para hacerlo. Allega el oficio radicado 202241730100511062 del 30 de marzo de 2011, que contiene los alegatos de conclusión dentro del proceso verbal 647-16, argumentos a los cuales remite al despacho de segunda instancia para resolver el recurso de alzada.

ALEGATOS DE CONCLUSION EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de escrito radicado 202241730100939262 del 13 de junio de 2022, el disciplinado presenta en oportunidad alegatos de conclusión, en donde remite a los alegatos presentados ante la primera instancia, reitera solicitud de prescripción de la acción disciplinaria y relaciona nuevamente los precedentes jurisprudenciales que no fueron atendidos por la primera instancia, conforme a su apreciación, procediendo a señalar que la primera instancia actuó en forma negligente al no impulsar la actuación



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

con más de tres años y vulnerar los criterios establecidos en el artículo 162 de la Ley 734 de 2002 para la aplicación del proceso verbal, por lo cual solicita revocar el fallo de primera instancia, declarar la prescripción y por ende pérdida de competencia para conocer del proceso por el Director de Control Disciplinario Interno; así como, planteó una petición adicional (extraprocesal) a la cual no se hace alusión en este escrito por no encontrarse relacionada con el objeto del presente acto administrativo, documento visible folio 529 a 539 cuaderno trámite segunda instancia.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto, reiterando que la normatividad aplicable al caso corresponde a la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, por expresa disposición legal contenida en el Código General Disciplinario o Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, la cual prevé un régimen de transición y de vigencia, así:

"Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley."

"ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Artículo modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras "y la consulta" que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y la norma relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.

PARÁGRAFO 1o. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.

PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011."

Siendo que en el asunto de marras, se instaló la primera audiencia del proceso verbal el 13 de diciembre de 2021 y que la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021, sólo entró a regir o en vigencia a partir del 29 de marzo de 2022, con la excepción antes referida, el procedimiento aplicable en este caso corresponde al señalado en la Ley 734 de 2002, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación (Artículo 171 ibídem).

Una vez efectuada la precisión del procedimiento aplicable, este Despacho se pronuncia respecto a la petición de nulidad impetrada por el investigado, oficio radicado 202241240100009604 del 12 de mayo de 2022, la cual se despachará desfavorablemente por las siguientes razones:

[Firma]
Cmud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La solicitud de nulidad presentada por el investigado ante esta instancia es extemporánea; por cuanto al tenor de lo señalado en el artículo 146 del CDU, "La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten". Es del caso señalar que el investigado en su oportunidad, presentó petición de nulidad que fue resuelta en su momento por el operador disciplinario de primera instancia en forma negativa, tal como se tiene del acta de la audiencia celebrada el 13 de diciembre de 2021 y la respectiva grabación de la misma, la cual reposa en el expediente. Folio 394 a 399.

El escrito presentado ante esta instancia por el investigado reitera los argumentos de hecho y derecho expuestos en la petición de nulidad formulada ante la primera instancia, motivo por el cual al no vislumbrar este Despacho, situaciones de hecho nuevas o que afecten el Debido Proceso no es dable aceptar la petición de nulidad.

Por otra parte, en el asunto objeto de estudio, encuentra este Despacho que la solicitud de nulidad reitera los argumentos del recurso de apelación que serán objeto de análisis en esta providencia², indicando que ha ocurrido la figura de la prescripción y alegando el incumplimiento de las etapas procesales dentro de la actuación disciplinaria, puntos planteados como causales de nulidad en el trámite de primera instancia y resueltos en forma desfavorable para el investigado, pero que por sustentar el recurso de alzada serán resueltos uno a uno como en efecto se procede a continuación, pero no en el marco de la petición de nulidad, la cual se reitera, es extemporánea y por ende se rechaza de plano.

DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO – DE LA CADUCIDAD Y
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

Aparece en el expediente que el investigado invocó la aplicación de esta figura ante la primera instancia, la cual fue resuelta en forma desfavorable con argumentos que comparte este Despacho, como se precisa a continuación:

Inicialmente, se ha de indicar que la figura de la Prescripción de la acción disciplinaria ha tenido una regulación legislativa variable. En efecto, el Código Disciplinario Único, Ley 734 de febrero 5 de 2002 en su momento de expedición, retomó la aplicación de la siguiente manera:

"ARTICULO 30. TERMINOS DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

²Señala en su petición el investigado, así: "ASUNTO: OMISION, INOBSERVANCIA E INAPLICACION DE LAS JURISPRUDENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA CORE CONSTITUCIONAL, DE LOS PRECEDENTES JUDICIALES Y DE LA LEY 734 DE 2002, EN LA DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA ALCALDIA DISTRICTAL DE SANTIAGO DE CALI, POR EL DIRECTOR GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO, LOS ABOGADOS CONTRATISTAS SAUL HERNEY MUÑOZ VARGAS Y CRISTIAN MUÑOZ INSUASTY



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

En el termino de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4,5,6,7,8,9,10 del artículo 48.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique."

La anterior norma estuvo vigente por un período cercano a nueve (9) años; empero, el 12 de julio de 2011 se expide la Ley 1474, también conocida como Estatuto Anticorrupción, la cual entre su articulado, dispuso modificar el artículo 30 del Código Disciplinario Único e incluyó dentro del ámbito normativo de esta área del derecho, el fenómeno de la caducidad de la acción disciplinaria, para distinguirla de la figura de la prescripción. En efecto, la norma en comento estipuló:

"ARTÍCULO 132. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:

"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique".

Así las cosas, conviene precisar que la caducidad y la prescripción son dos figuras jurídicas diferentes. La caducidad limita en el tiempo la facultad del Estado para iniciar investigación disciplinariamente a un servidor público o particular que ejerza funciones públicas, a efectos de establecer los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria, para lo cual, el legislador señaló que la Procuraduría General de la Nación o la entidad competente, cuenta con el término de cinco (5) años para proferir auto de apertura de investigación y/o aplicación proceso verbal y citación a audiencia, según sea el procedimiento aplicable, contabilizado desde la ocurrencia de la falta disciplinaria.

Por otro lado, la prescripción, tal como se indicó anteriormente, conlleva la pérdida de la facultad del Estado, como titular de la acción disciplinaria, de imponer sanción en contra del investigado, habida cuenta del término que ha transcurrido (5 años) sin que se adopte y notifique una decisión de fondo en primera instancia.

García



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Sobre la Prescripción y su naturaleza jurídica, la Corte Constitucional en sentencia C556 del 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis, cuando "con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de una norma que pretendía ampliar el término de la prescripción, en ciertas circunstancias, tuvo oportunidad de precisar el significado de esta figura frente a la potestad disciplinaria de la administración. Al respecto expresó:

"La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción.

El fin esencial de la prescripción de la acción disciplinaria, está íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación. Si la acción disciplinaria tiene como objetivo resguardar el buen nombre de la administración pública, su eficiencia y moralidad, es obvio que ésta debe apresurarse a cumplir con su misión de sancionar al infractor del régimen disciplinario, pues de no hacerlo incumpliría una de sus tareas y, obviamente, desvirtuaría el poder corrector que tiene sobre los servidores estatales. "La defensa social no se ejerce dejando los procesos en suspenso, sino resolviéndolos.... Si el proceso no se resuelve, no será por obra del infractor, sino, ordinariamente, por obra de la despreocupación o de la insolvencia técnica de los encargados de juzgar".

El término de cinco años fijado por el legislador, en el inciso primero del artículo 34 de la ley 200 de 1995, para la prescripción de la acción disciplinaria, fue considerado por éste como suficiente para que se iniciara por parte de la entidad a la cual presta sus servicios el empleado o la Procuraduría General de la Nación la investigación, y se adoptara la decisión pertinente, mediante providencia que ponga fin al proceso.

Así las cosas, no encuentra la Corte justificación razonable para que se extienda dicho término de prescripción, más allá de los cinco años señalados, para los casos en que se haya notificado fallo de primera instancia, como se hace en el parágrafo 1o. objeto de demanda, disposición que configura una clara violación de los artículos 29 y 13 de la Constitución, como se verá enseguida. (...)

Es que, si el Estado no ejercita su potestad disciplinaria dentro del término quinquenal señalado por el legislador, no puede después, invocando su propia ineficacia, desinterés o negligencia, ampliar dicho lapso prescriptivo sin violar el derecho del infractor, de exigir una pronta definición de su conducta. Es que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, hasta cuando la autoridad respectiva la quiera ejercer, de ahí que el legislador haya establecido un límite en el tiempo -5 años-. (...)"

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva 016 de noviembre 30 de 2011, impartió instrucciones para la aplicación de la ley 1474 de 2011, en la que dispuso:

"(...) Que en consecuencia, como institutos jurídicos liberadores de la responsabilidad, deberá entenderse que la caducidad y la prescripción contienen un derecho sustantivo a favor del disciplinado, pues lo benefician de la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica en un plazo razonable, ya que no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de que se le investigue y cuestione por su proceder, o a la imputación que se ha proferido en su contra.
(...)"



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.210080 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

Que en concordancia con el inciso primero del artículo 132 de la ley 1474, debe entenderse que la apertura de la acción disciplinaria se da con el auto de apertura de la investigación, o con el de citación a audiencia en el procedimiento verbal.

(...)

Que en materia de prescripción la ley 1474 de 2011 no hace referencia específica a las faltas señaladas en el inciso segundo del artículo 30 de la ley 734 de 2002, estableciendo una regla general y uniforme de cinco (5) años de prescripción y creando la figura de la caducidad.

(...)

PRIMERO. El artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, deberá aplicarse en materia de prescripción solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del 12 de julio de 2011...

SEGUNDO. Para los efectos de la Ley 1474 de 2011, se deberá entender que la acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la investigación disciplinaria o del auto de citación a audiencia, según fuere el procedimiento...”

Así las cosas, para evaluar la posibilidad de aplicar los precedentes jurisprudenciales invocados por el recurrente, los cuales considera han sido desatendidos por la primera instancia, es menester previamente tener en cuenta la vigencia de la norma en el cual se expide cada proveído, porque como se esbozo el líneas precedentes, el tratamiento jurídico de estas figuras ha sido diferente en el tiempo. En efecto, revisando las jurisprudencias invocadas por el investigado, tenemos lo siguiente:

| PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INVOCADO POR EL RECURRENTE | PROBLEMA JURIDICO Y VIGENCIA NORMATIVA |
|---|--|
| Consejo de Estado, sentencia 00050 de 2012, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero | El asunto sometido a estudio correspondió a: “El actor, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pide que se declare la nulidad del fallo de única instancia del 21 de octubre de 2005 y del acto administrativo del 17 de enero de 2006 que el resuelve recurso de reposición, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales se le impuso sanción de destitución en el cargo de Personero Municipal de Leticia y Puerto Nariño (Amazonas) e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años.” – Negrilla fuera de texto. Como se nota, los hechos resueltos por el máximo tribunal Contencioso Administrativo en esta sentencia, refieren a actuaciones efectuadas en los años 2005 y 2006; es decir, que la fecha de ocurrencia de los hechos que constituyen la falta disciplinaria son anteriores y por ende, la norma aplicable era la establecida inicialmente por la Ley 734 de 2002 respecto a la figura de prescripción, pues aún no se había proferido la Ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 30 ibídem, por lo cual, los considerandos de esta sentencia no son aplicables a la resolución del presente caso, cuyos hechos objeto de investigación ocurrieron en 2016 y por tanto es aplicable la modificación introducida en 2011; por lo cual no le asiste razón al recurrente en su afirmación de que fue desatendido el precedente jurisprudencial. |
| Consejo de Estado, sentencia 06148 del 1 de agosto de 2018, C. P. Sandra Lisset | La decisión resolvió recurso de apelación interpuesto “en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, ⁴ el señor Ricardo Mosquera Meza solicitó: i) La nulidad de los fallos disciplinarios del 9 de noviembre de 2010 ⁵ y 22 de |



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

| | |
|---------------|--|
| Ibarra Vélez. | <p>diciembre de 2011,⁶ proferidos por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación respectivamente (...). La sentencia en sus consideraciones, señala: "Del anterior recuento, se concluye que la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la sentencia de 29 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual, dentro del término de cinco (5) años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 —sin la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011—, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el fallo de primera o única instancia." – Negrilla fuera de texto.</p> <p>Téngase en cuenta que en el caso objeto de estudio del proveído invocado, los hechos constitutivos de la falta disciplinaria resultan ser anteriores a 2010 (fecha primer fallo), en tal sentido, esta sentencia y las consideraciones de la misma no son aplicables al caso objeto que nos ocupa, por cuanto, se reitera, para la fecha de ocurrencia de los hechos que aquí se investiga (2016), la norma aplicable era el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 con la modificación introducida en la Ley 1474 de 2011.</p> <p>De este proveído es importante resaltar que el Consejo de Estado hace referencia a la modificación introducida en 2011, así:</p> <p>"De igual forma, de acuerdo con la norma que actualmente rige la prescripción de la acción disciplinaria —artículo 30 de la Ley 734 de 2002⁴⁴— el término puede ser de 5 o 12 años dependiendo de si se trata de faltas comunes o faltas especial gravedad; la contabilización del plazo es independiente para cada una de las conductas investigadas y el inicio de la contabilización es diferente si se trata de faltas de carácter instantáneo o de carácter continuado, pues para las primeras comienza desde su consumación mientras que para las segundas desde el último acto de realización.</p> <p>De conformidad con las conclusiones expuestas en el presente acápite, respecto de los elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta para la contabilización de prescripción de la acción disciplinaria, a continuación, la Sala se permite esquematizar el referido asunto, así:</p> <div><div>- 5 años —para faltas comunes—.</div><div>PLAZO</div><div>- 12 años para faltas de especial gravedad.</div><div>INICIO DE CONTABILIZACION DEL PLAZO</div><div>Para las faltas de agotamiento instantáneo - Desde el cometimiento de la conducta</div><div>Para las faltas de agotamiento continuado - Desde el cometimiento de la última conducta.</div><div>FORMA DE</div><div>Independiente para cada una de las conductas investigadas</div></div> |
|---------------|--|



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

| | |
|---|--|
| | <p>CONTABILIZACIÓN un mismo proceso disciplinario.</p> <p>INTERRUPCIÓN DEL TERMINO Con la expedición y notificación de los fallos de primera o única instancia.</p> <p>CONSECUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Pérdida de la competencia para sancionar." Negrilla fuera de texto</p> |
| <p>Tribunal Contencioso del Cauca, radicado 19001-23-33-003-2013-00679-00, M. P. Carlos Hernando Jaramillo Delgado, sentencia del 24 de agosto de 2015.</p> | <p>La decisión fue emitida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de: <i>"Fallo disciplinario de primera instancia proferido el 16 de diciembre de 2010, por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Administrativa en contra del Dr. Juan José Chaux Mosquera, en su otrora calidad de Gobernador del Departamento del Cauca. Fallo disciplinario de segunda instancia proferido el 20 de mayo de 2013, mediante el cual la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de primera instancia."</i></p> <p>En igual sentido que lo indicado anteriormente, la sentencia en sus consideraciones hacen referencia al contenido del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 sin la modificación surgida en 2011 con la Ley 1474, por lo cual, tampoco resulta aplicable a la resolución del presente caso.</p> |

Como corolario de lo anterior, tenemos que los precedentes jurisprudenciales invocados por el investigado no aplican a la resolución del caso objeto de estudio, habida cuenta que los mismos fueron proferidos en vigencia del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 sin las modificaciones introducidas con la Ley 1474 de 2011; por tanto, no evidencia este Despacho el desconocimiento al precedente que afirma el recurrente y no le asiste razón en sus argumentos.

Ahora bien, esclarecido el régimen jurídico aplicable al caso concreto planteado, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 con la modificación introducida en 2011 por la Ley 1474, debe considerarse los requisitos o exigencias determinadas por el legislador para la operancia de la caducidad y la prescripción; así como, los criterios de contabilización de los mismos.

A
Camoy
22



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

Al respecto, como se precisó con antelación, se distingue lo siguiente:

| FIGURA JURÍDICA | CRITERIOS CONTABILIZACIÓN | FECHAS CASO CONCRETO |
|--------------------------------------|---|---|
| CADUCIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA | “si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria” – Interrumpe término de caducidad que se profiera el auto de apertura de investigación disciplinaria, entendido como tal, “el auto de apertura de la investigación, o con el de citación a audiencia en el procedimiento verbal.” | <p>Fecha ocurrencia de los hechos:</p> <p>El Fallo de primera instancia señala como conducta disciplinable desplegada por el investigado la siguiente:</p> <p>“incumplió el deber funcional previsto en el Decreto 1944 de 1997, de impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo el proceso de humedad No.1944-549, (...), cuando procedió a archivar injustificadamente el expediente mediante el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de 2016...”</p> <p>En tal sentido, la fecha de ocurrencia de la falta corresponde al 10 de agosto de 2016.</p> <p>Mediante auto No. 4124.010.9.13.647-16-1618 del 27 de julio de 2021 (folios 336 a 349), se ordenó la aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia del servidor público, con este proveído se interrumpe los términos de caducidad de la acción disciplinaria a partir del 27 de julio de 2021.</p> <p>SUSPENSIÓN TÉRMINOS</p> <p>En 2020 como consecuencia de la emergencia por Covid 19 y las medidas de aislamiento adoptadas incluso a nivel internacional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020 que dispuso en el artículo sexto la posibilidad de suspender términos en actuaciones administrativas, incluidos procesos disciplinarios, indicando que Durante el término que dure la suspensión y hasta el</p> |



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia."</p> <p>En Santiago de Cali, el Alcalde Distrital de Santiago de Cali dispuso la suspensión de términos en actuaciones administrativas, entre ellas, los procesos administrativos sancionatorios (disciplinarios) desde el 17 de marzo hasta el 18 de agosto de 2020, Decretos Municipales Nos. 4112.010.20.0725 de marzo 17 de 2020 y 4112.010.20.1443 de agosto 19 de 2020.</p> <p>CONCLUSION</p> <p>En el caso objeto de estudio NO ha ocurrido el fenómeno de la Caducidad de la Acción Disciplinaria, por cuanto el operador disciplinario profirió el Auto No. 4124.010.9.13.647-16-1618 el 27 de julio de 2021; es decir, antes de que transcurrieran los cinco (5) años de que trata la norma, contabilizados desde agosto 10 de 2016, incluso sin considerar los términos de suspensión de los procesos disciplinarios por razones de la emergencia sanitaria.</p> |
| PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA | <p>REGLA GENERAL: "La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria."</p> <p>INTERRUPCION: Con la expedición y notificación de los fallos de primera o única instancia, según sea el caso</p> | <p>Fecha de apertura de la investigación: JULIO 27 DE 2021</p> <p>Fecha Fallo Primera Instancia: ABRIL 27 DE 2022</p> <p>Notificación por Estrados en audiencia de la misma fecha.</p> <p>CONCLUSION: En el caso NO ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, considerando que la investigación inicio en julio 27 de</p> |



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

| | | |
|--|--|--|
| | | 2021 y la notificación del fallo de primera instancia, que interrumpe los términos de prescripción, se efectuó antes de transcurrir los cinco (5) años que dispone la Ley (Abril 27 de 2022) |
|--|--|--|

DEL TRÁNSITO NORMATIVO Y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

Ahora bien, realizado el análisis anterior y considerando que en el asunto de marras no ha ocurrido el fenómeno de la caducidad ni de la prescripción y por ende la primera instancia conservaba la competencia para tramitar y decidir el asunto de fondo, conforme a la normatividad antes referida, procede el Despacho a abordar otro de los argumentos expuestos por el recurrente, a saber:

Señala el investigado que con ocasión al cambio normativo que actualmente ocurre en materia de Derecho Disciplinario con la expedición de la Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario, modificado por la Ley 2094 de 2021, la figura de la Prescripción tiene un nuevo tratamiento legal que le es más beneficioso y por ende solicita su aplicación en virtud del Principio de Favorabilidad.

En efecto, encuentra este Despacho que el Código General Disciplinario, contempla en el artículo 33 lo siguiente:

"ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique."



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

En tal sentido, resulta que a partir de la vigencia de la norma, se elimina del ordenamiento jurídico la figura de la caducidad y únicamente se conserva la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, indicando que el término de cinco (5) años, se contabiliza desde el día de consumación de la falta para el caso de faltas instantáneas, como la que se estudia en el caso objeto de investigación, cuya fecha de ocurrencia correspondió al 10 de agosto de 2016 y sólo se interrumpe con la notificación del fallo de primera instancia, que en el proceso corresponde a abril 22 de 2022, comparación de criterios y fechas que conllevaría en un primer análisis a señalar que en el asunto de marras ocurriría el fenómeno de la prescripción; sin embargo, preciso es señalar que la misma norma (Código General Disciplinario) determinó un régimen de vigencia especial y sucesivo.

Es así que la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, sobre la vigencia de la norma señaló:

"ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Artículo modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras "y la consulta" que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.

PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.

PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011."

El Parágrafo Segundo de la norma antes transcrita, señala que el Artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrará a regir treinta (30) meses después de su promulgación; es decir, el artículo 7 que modifica el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, referido a la PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA, por expresa disposición del Legislador, sólo entrarán a regir a partir del 29 de diciembre de 2023.

En ese orden de ideas, considera este Despacho que no es viable aceptar la petición efectuada por el recurrente; toda vez que la norma más beneficiosa (Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021) expresamente estableció una fecha a partir de la cual entrará a regir o en vigencia; por tanto al momento de adopción de la presente decisión dicha norma no se encuentra surtiendo efectos o en vigencia, de ahí que este operador jurídico disciplinario, debe acatar en sus decisiones lo dispuesto en la



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Constitución y la Ley vigente al momento de su producción y no podría ir en contravía de lo dispuesto por el legislador.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema en diferentes oportunidades. En Consulta No. C-68 – 2021 del 30 de agosto de 2021, señalando los siguientes criterios jurídicos de interpretación y aplicación, así:

"(...) Pues bien, antes de abordar cada uno de los aspectos por los cuales se indaga, cabe señalar, en cuanto a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, que el artículo 73 de la Ley 2094, del 29/06/2021³, que modificó el artículo 265 del CGD, consagró lo siguiente:

Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. [...] PARÁGRAFO 1.º El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación⁴. // PARÁGRAFO 2.º El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011.

Ello se traduce en que como la Ley 2094 fue promulgada el 29 de junio de 2021, en el Diario Oficial 51.720, el CDU seguirá rigiendo hasta que entre en vigor el CGD, es decir, el 29 de marzo de 2022, salvo los artículos 1.º y 7.º de la citada Ley 2094. Entonces, con fundamento en dichas vigencias, y frente a escenarios de tránsito de legislaciones, en el concepto C-101 – 2019, se indicó lo siguiente:

[L]a Corte Constitucional ha dicho que «en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución solo impone como límites el respeto de los derechos adquiridos, y el principio de favorabilidad y de legalidad⁵ [...]. Por fuera de ellos, opera la libertad de configuración legislativa⁶. Entonces, de cara a estos dos componentes del debido proceso, debe señalarse que existe una máxima constitucional cual es que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, siempre que se respete el principio de favorabilidad⁷. De ella, se desprenden las siguientes reglas de aplicación de la ley general en el tiempo:

1.- Las normas rigen hacia el futuro.

2.- Las normas procesales o de trámite entran a regir inmediatamente⁸, debido a su

³ «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».

⁴ No obstante, en el inciso primero del artículo siguiente se consagró: «ARTÍCULO 74. RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES. El reconocimiento y ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación en esta ley, comenzarán a regir al día siguiente de su promulgación».

⁵ En el derecho disciplinario, dos de los componentes del debido proceso son el principio de legalidad, integrado a su vez por el de reserva de ley y el de tipicidad; y el principio de favorabilidad (Cfr. sentencia C-818/05).

⁶ Ver sentencia C-619/01.

⁷ «ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable [...]».

⁸ Así lo establece en términos generales el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso: «[l]as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones [...]».

27
gms



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

carácter público, salvo que el legislador haya dispuesto otra cosa (régimen de transición, en los que puede aplazar su entrada en vigencia para determinadas relaciones jurídicas o en los que puede tener efectos sobre relaciones jurídicas en curso)⁹.

3.- Por el contrario, para las normas sustanciales (materia sancionatoria y punitiva), la regla general es la irretroactividad (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)¹⁰. La excepción es la siguiente: «las normas más favorables son susceptibles de ser aplicadas retroactivamente, como si hubieran estado vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos»¹¹. [...].

En suma, ante una sucesión de leyes en el tiempo, emana para la autoridad disciplinaria el deber de escogencia de la ley más benigna a aplicar al caso concreto: «el juez disciplinario, con el fin de no violar el debido proceso, “no puede limitarse a la aplicación invariable de las normas según las reglas generales relativas al tiempo de su vigencia (irretroactividad de la ley), sino que se halla obligado a verificar si la norma posterior, no obstante haberse promulgado después de ocurridos los hechos, puede favorecer al [...] procesado, pues, si así acontece, no tiene alternativa distinta a la de aplicar tal disposición»¹².

De manera que hasta tanto entre en vigor el artículo 33 del CGD, modificado por el artículo 7.º de la Ley 2094/21¹³, los términos de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria son los previstos en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011; y solo cuando haya sucesión de leyes en el tiempo —requisito que está dispuesto que ocurra a partir del 29 de diciembre de 2023—, la autoridad disciplinaria aplicará, caso a caso, la retroactividad del CGD¹⁴, tal y como lo consagra la regla tres que antecede.

⁹ Ver sentencia C-692/08. En este orden, «las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior» hacen alusión a las normas procesales del CDU.

¹⁰ En la precitada sentencia C-619/01 se dejó consignado que «la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se refiere la norma constitucional son aquellas de carácter substancial que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta cuando indica: // “La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40». Específicamente, en materia disciplinaria, la sentencia C-692/08 expresó «que las “normas preexistentes” a que hace referencia el artículo 29 de la Carta Política, son las normas de carácter sustantivo, conforme a las cuales se definen las faltas disciplinarias y sus sanciones».

¹¹ La Corte Constitucional, en la sentencia C-181/02, señaló que «[p]ara efectuar la aplicación favorable de la norma y dar entidad al principio mismo se recurre generalmente a [...] la retroactividad de la ley, fenómeno en virtud del cual la norma nacida con posterioridad a los hechos regula sus consecuencias jurídicas como si hubiese existido en su momento». También puede consultarse la sentencia C-329/01. A su vez, en la sentencia T-530/09 se dijo que «la aplicación de la favorabilidad disciplinaria también implica una mema del principio de seguridad jurídica en la medida en que “una situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos”».

¹² Cfr. sentencia C-481/98. En esta misma línea, la precitada sentencia T-152/09 señaló que «la favorabilidad en el derecho sancionador del Estado, penal o disciplinario, es un principio orientador para el operador jurídico no de la interpretación de la ley, sino de la escogencia de la ley aplicable al caso cuando hay sucesión de leyes en el tiempo».

¹³ «ARTÍCULO 7.º Modifícase el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: // Artículo 33. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. // Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. // La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia. // PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique».

¹⁴ Conocido también como regla de la retroactividad de la ley más favorable.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

En Consulta radicado C 98 del 19 de noviembre de 2021, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, sobre la vigencia de la norma señaló:

"(...) Sobre el particular, debe recordarse que, en virtud de la cláusula general de competencia, el legislador está facultado para definir la técnica que empleará al regular la entrada en vigencia de las leyes¹⁵; y la aquí analizada es «un típico ejemplo de lo que se conoce en la doctrina como **vigencia sucesiva** de una ley, por oposición a la **vigencia sincrónica**. Esta última ocurre cuando todas las disposiciones constitutivas de la ley entran en vigencia simultáneamente, mientras que la primera se presenta cuando tal vigencia va dándose parcialmente, en el tiempo, a medida que las circunstancias previstas por el legislador la hacen exigible»¹⁶.

Entonces, como la Ley 2094/21, que modificó la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, fue promulgada el 29 de junio de 2021¹⁷ —en consideración a la metodología de entrada en vigencia posterior a la promulgación, con diferentes plazos, empleada por el Congreso—, se concretan los siguientes eventos:

- 30 de junio de 2021: entró en vigor el artículo 1.º de la Ley 2094/21, relativo a las funciones jurisdiccionales¹⁸ (en armonía con lo dispuesto en el artículo 74 *ib.*).
- 29 de diciembre de 2023: comienza a regir el artículo 7.º de la Ley 2094/21, respecto a la prescripción de la acción disciplinaria¹⁹.

¹⁵ En la sentencia C-84/96, la Corte Constitucional precisó que «si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del momento a partir del cual dicha normatividad [sic] empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide».

¹⁶ Cfr. sentencia C-302/99.

¹⁷ Cfr. Diario Oficial 51.720.

¹⁸ «ARTÍCULO 1.º Modifícase el artículo 2.º de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:
Artículo 2.º Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. // Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. // Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. // Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditarán a lo que decida la autoridad judicial. // Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. // A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente. // La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política. // La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta». (Negrilla fuera de texto).

¹⁹ «ARTÍCULO 7.º <En lo relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir del 29 de diciembre de 2023 (Art. 73)> Modifícase el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 33. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. // Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. // La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

- 29 de marzo de 2022: entra a regir el resto de artículos del compendio normativo, es decir, tanto los de la Ley 2094/21 como los del CGD.

Y, en este orden, en cuanto al régimen de transición se tiene que el 29 de marzo de 2022, los procesos disciplinarios en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal continuarán su trámite hasta su terminación, conforme a las reglas procesales previstas en la Ley 734 de 2002 —sin perjuicio de la separación de roles de instrucción y juzgamiento—; y los procesos disciplinarios que se encuentren en un estadio anterior, se ajustarán al procedimiento establecido en el CGD. (...)"

DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO – DEL VENCIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA

Reitera el investigado el argumento expuesto ante la primera instancia, referido a que en la presente actuación disciplinaria el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali ha desatendido los términos previstos en la Ley 734 de 2002 para las diferentes etapas, indagación preliminar e investigación disciplinaria, razón por la cual considera el recurrente debe declararse la nulidad de lo actuado y proceder al archivo del proceso.

Al respecto, preciso es señalar que la jurisprudencia de las altas cortes ha sido constante y pacífica frente a manifestar que la inobservancia de los términos de la actuación disciplinaria, por sí misma, no constituye una causal que afecte gravemente el Debido Proceso y por ende no constituye en causal de nulidad, así:

El Debido Proceso constituye un derecho fundamental del ciudadano, contemplado en nuestro ordenamiento interno en el artículo 29 de la Constitución Política y en instrumentos internacionales²⁰, que conlleva la aplicación de los siguientes principios, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, a saber: "(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la *reformatio in pejus*."²¹

En materia disciplinaria esta garantía se concreta en el cumplimiento de los deberes del operador jurídico emanados del Código Único Disciplinario, así:

"i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;

primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia. // PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique».

²⁰ Artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 14 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Artículo 8 y 9 Convención Americana de Derechos Humanos (Garantías Judiciales y Principio de legalidad y retroactividad). La Corte Interamericana sobre el artículo 8º. De la Convención, señala que reconoce el llamado "debido proceso legal" que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial (Opinión Consultiva OC9/87).

²¹ Corte Constitucional, sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010, entre otras.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0080 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

- ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias;
- iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;
- iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
- v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;
- vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y
- vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”²²

El artículo 150 de la Ley 734 de 2002 señala:

“PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar.

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. (...)”

Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 901 del 1º de septiembre de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, manifestó:

“(…) De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, el sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación”.

“De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió

²² Sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.210000 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento”.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 10 de octubre de 2013, dentro del radicado interno No, 0972-2012, con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, sobre exceder los términos en las etapas procesales disciplinarias señaló:

“Violación al debido proceso por desconocimiento del término en la indagación preliminar y la investigación disciplinaria.

La demandante considera que la etapa de indagación preliminar y de la investigación disciplinaria superó el término establecido en los artículo 150 y 156 de la Ley 734 de 2002, dentro del cual el operador disciplinario debió proferir auto de apertura de investigación, de archivo de las diligencias, o el pliego de cargos, desconocimiento que constituye una vulneración del derecho fundamental al debido proceso y viola de forma flagrante disposiciones constitucionales.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

Dispone el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. A su vez, el artículo 156 ibídem dispone que el término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la decisión de apertura.

No obstante, es necesario aclarar que el hecho de que se haya superado el término previsto en la ley, por sí mismo, no conlleva la vulneración de las garantías del investigado, ni afecta de nulidad la actuación. Tampoco conduce a la afirmación de que la Procuraduría General de la Nación incurrió automáticamente en una afectación grave de las garantías constitucionales y que, como consecuencia de ésta, toda la actuación efectuada carezca de validez”

En igual sentido se pronunció la Alta Corporación en sentencia del 31 de enero de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, dentro del radicado 00089 de 2018, con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter, manifestó:

“2.8.2 Exceder el término legal del procedimiento disciplinario no invalida la actuación si no se afectó el debido proceso ni el derecho de defensa del investigado. Reiteración de jurisprudencia. Aduce el demandante que se incurrió en el cargo de violación del debido proceso por cuanto no se acataron los términos procesales establecidos en los artículos 70 y 156 del Código Disciplinario Único, según los cuales, una vez conocida la conducta violatoria de la ley disciplinaria, se debe comenzar la investigación y culminarla en un plazo de 6 meses, que en este caso se sobrepasó con creces.

Sobre el particular, esta Sala, en aplicación de la Ley 200 de 1995, ha señalado que «[...] el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar en cuanto que, como ya tuvo oportunidad de expresarlo la Sala¹², las normas disciplinarias previstas en los artículos 55 y siguientes de la ley 200 de 1995 no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida de la facultad para continuar conociendo el asunto y, tampoco se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario, el adelantamiento de actuaciones después de vencidos los plazos. [...]».



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

En vigencia y para la aplicación de la Ley 734 de 2002, la Sala también ha reiterado que el vencimiento del término señalado para las etapas del procedimiento disciplinario acarrea sanciones para el funcionario que tiene a cargo realizar las diligencias y por descuido deja superar el término, pero no es causal de nulidad de los actos recurridos, si no se presenta violación al debido proceso, y tampoco implica la pérdida de competencia del funcionario que adelanta el procedimiento”.

Similar postura plantea el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 11 de noviembre de 2010, en radicado 17283, Consejero Ponente Hugo Hernando Bastidas Bárcenas, afirmó:

“...Ahora bien, en general, los términos procesales que tiene el Estado para proferir las decisiones correspondientes son términos de tipo perentorio pero no necesariamente preclusivos. Es decir que, así esté vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como cuando estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la Administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto favorable al administrado. El vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma [sic]. Ese tipo de plazos son los más comunes en el derecho procesal, como por ejemplo, el plazo para dictar la sentencia que instituye tanto el cca como el cpc. Así esté vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad personal del funcionario judicial si el vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente”.

“En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma...”.

Y en sentencia del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, Consejera Ponente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, enero 31 de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00032-01(1630-15), acción de nulidad y restablecimiento del derecho:

“(...) La Corte Constitucional²³, ha sido insistente en precisar la importancia que tiene para la conservación de las garantías del debido proceso el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales estas se desarrollen, al punto que el cumplimiento de aquellas por parte de la Autoridad encargada de adelantar un trámite administrativo y/o judicial, constituye base fundamental para la efectividad de los derechos de los ciudadanos. La consagración de los términos procesales lleva implícito el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión de las autoridades, en otras palabras, a que los asuntos puestos en conocimiento de aquellas se resuelvan sin dilaciones injustificadas.

Sin embargo, ese mismo Tribunal²⁴ señaló que la inobservancia “per se” de un término procesal no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado. En relación con lo anterior esta Sala también ha precisado que, sin desconocer el derecho que tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario. (...)”

²³ Sentencia C-181 de 12 de marzo 2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

²⁴ Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 1 de septiembre de 2005. Sala Plena

[Firma]
A
García



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0000 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

Bajo el contexto anterior, no está llamado a prosperar el argumento del recurrente frente a la pretermisión de los términos, tal como ampliamente se indicó en párrafos precedentes; sin embargo, considera este Despacho preciso señalar que en el asunto sometido a estudio, efectivamente vislumbra unos plazos amplios para la adopción de las decisiones y el impulso propio del expediente principal (647-16) al cual se acumuló el proceso 068-17.

En efecto, la queja disciplinaria fue radicada en el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali el día 2 de noviembre de 2016, por traslado realizado por la Personería de Santiago de Cali, oficio 20164124000592-2. El 19 de diciembre de 2017 se emite el Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-4187 por el cual da inició a indagación preliminar cuyo término de duración es de seis (6) meses; es decir, el vencimiento ocurrió el 19 de junio de 2018, tiempo durante el cual se adelantaron las actuaciones probatorias sin que el trámite de la indagación se haya extendido más allá de dicho período y por ende, generando validez de lo actuado.

No reposa en el expediente actuaciones surtidas en el proceso con posterioridad al vencimiento del término de indagación preliminar, ni durante el año 2019. En la vigencia 2020 debe considerarse los períodos de suspensión de términos por efectos de la pandemia por Covid 19, como se indicó anteriormente.

En la vigencia 2021 se profiere el Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1617 del 27 de julio de 2021 que dispone acumular el proceso 068-17 al 647-16 y en la misma fecha, se profiere el Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1618 que ordena aplicar el proceso verbal y cita a audiencia, períodos de tiempo por los cuales el despacho considera que el reclamo del recurrente frente a la celeridad en la actuación disciplinaria debe ser objeto de evaluación por el órgano de control disciplinario externo, motivo por el que se dispondrá trasladar copia de este proveído a la Personería Distrital de Santiago de Cali a efectos de que evalúe la procedencia de iniciar o no una investigación disciplinaria.

ARGUMENTO DEL RECURRENTE – SOBRE LOS REQUISITOS PARA APLICAR
PROCESO VERBAL

Afirma el impugnante que con la expedición del Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1618 que ordena aplicar el proceso verbal y cita a audiencia, la primera instancia incumplió lo estipulado en el artículo 161 y 162 de la Ley 734 de 2002; por cuanto en su criterio, “el pliego de cargos, debió formularse, tal como lo dispone el artículo 161 ibídem. En ningún momento, podrá realizarse, en el Auto que ordena el procedimiento verbal, mucho menos, en este, puede existir la posibilidad de evaluar las indagaciones preliminares, tal como fue proyectado y suscrito...”

Al respecto, es del caso señalar al recurrente, tal como lo hizo la primera instancia, que en materia de derecho disciplinario y en vigencia de la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario (con las modificaciones introducidas), se conocen dos tipos de procesos, así:

34
quity



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

Proceso ordinario contenido en el Título IX, Capítulo I de la Ley 734 de 2002, desde el artículo 150 a 170 (primera instancia) y artículo 172 sobre segunda instancia.

Procedimiento Especial, procedimiento verbal, Título XI, Capítulo I, desde el artículo 175 a 181.

Sobre el tema, el Consejo de Estado en sentencia radicado 27001-23-33-000-2013-00338-01(4885-14) del 7 de mayo de 2020, Consejero Ponente William Hernández Gómez, precisó:

“(…) Con la finalidad de lograr mayor celeridad en los trámites disciplinarios, e impedir que la sanción pierda su pertinencia y efectos reparadores, la Ley 734 de 2002, concibió el procedimiento verbal como un medio expedito para adelantar las diligencias tendientes a verificar la responsabilidad del servidor público, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

El artículo 175 de la Ley 734 de 2002 definió los eventos en los cuales es viable adelantar la investigación disciplinaria por el procedimiento verbal, así:

Artículo 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

Puede observarse que además de los eventos de flagrancia, confesión, falta leve y las faltas gravísimas taxativamente definidas en la norma, el inciso cuarto de esa disposición señaló que, «en todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable», si al decidir sobre la procedencia de la apertura de investigación, la autoridad disciplinaria encuentra que se cumplen los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, esta deberá citar a audiencia.

En relación con este último evento, conviene precisar que, conforme al artículo 162 de la Ley 734 de 2002, habrá lugar a formular pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, mediante decisión que debe contener los aspectos relacionados en el artículo 163 ibídem.

Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-242 de 2010, declaró la exequibilidad del tercer inciso del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, al considerar que dicho precepto no vulneraba el artículo 29 de la Carta Política. Para la Corte, el propósito de esa regla era constitucionalmente legítimo, porque buscaba que las actuaciones en materia disciplinaria fueran ágiles y se adelantaran bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía procesal y celeridad, lo que armonizaba con el artículo 209 Superior, en concordancia con los objetivos que perseguía el Código Disciplinario Único y con el artículo 1 de la Ley 1285 de 200939, relacionado con la prontitud y eficacia de las actuaciones de la administración de justicia 40.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

La Corte también concluyó que, en el inciso antes mencionado, la expresión «en todo caso» tenía un alcance independiente del contenido de los primeros dos incisos del artículo, por lo que su aplicación dependía, únicamente, de la verificación objetiva de la falta, y de la existencia de elementos de prueba que comprometieran la responsabilidad de la persona disciplinada. Sobre esto, desde la doctrina se ha precisado que el primer requisito se refiere a la demostración de la tipicidad y la ilicitud sustancial de la conducta, y el segundo a la categoría dogmática de la culpabilidad....”

En ese orden de ideas, tenemos que el Despacho de primera instancia sustentó su decisión de aplicar procedimiento verbal y citar a audiencia, en que se encontraban acreditados los requisitos para proferir pliego de cargos; es decir, existía prueba que objetivamente acreditaba la falta y la responsabilidad del investigado, tal como detalló en el Auto No. 4124.0.10.9.13-647-16-1618 del 27 de julio de 2021, en especial, del contenido del expediente del proceso policivo de humedades del que encontró que el investigado adoptó la decisión del 10 de agosto de 2016 por la cual declaró la perención y archivo del proceso.

Así las cosas, considera el Despacho que no le asiste razón al investigado en su argumento; toda vez que la Ley permite al operador disciplinario adecuar el procedimiento conforme a las condiciones precisas en cada caso, siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso, tal como se encuentra acreditado en el asunto de marras, en el cual el investigado ha sido enterado oportunamente de las decisiones adoptadas y ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa, de aportar pruebas e igualmente controvertir las allegadas al proceso, motivo por el cual no se vislumbra una causal de nulidad y tampoco da lugar a revocar el fallo de primera instancia, tal como lo solicita el recurrente con su argumento.

ARGUMENTO DEL RECURRENTE – SOBRE LA PERENCIÓN Y SU APLICACIÓN EN
EL PROCESO POLICIVO DE HUMEDADES

Sostiene el recurrente que la primera instancia omitió circunstancias sustanciales del trámite del procedimiento de humedades ante la Inspección de Policía, las cuales considera, que de ser apreciadas como expone en sus argumentos de impugnación y en alegatos de conclusión, conllevarían al archivo del proceso por inexistencia de una falta disciplinaria. En tal sentido, procede este Despacho a evaluar dichos argumentos y su aplicación al caso concreto, conforme la normatividad vigente al momento de ocurrencia de los hechos y en especial, de acuerdo a las pruebas recaudadas en el proceso.

Al respecto, tenemos que la primera instancia en los dos cargos imputados y atribuidos al investigado como falta disciplinaria, consideró que el servidor público con la decisión proferida el 10 de agosto de 2016, Auto interlocutorio No. 4161.2.24.1-01, decretó la perención del proceso de humedades radicado 1944-549, considerando que desconoció el deber funcional de “impulsar, tramitar y resolver efectivamente de fondo”; así como, “actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad en el trámite del expediente (...) comportamiento que también pudo haber implicado un posible abuso indebido del cargo o función, toda vez que la decisión de archivo con la que concluyó el proceso, el auto No. 4161.2.24.1-01 de fecha 10 de agosto de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

2016, fue basado en una disposición inaplicable dentro del proceso de humedad, y carecía del sustento fáctico que demostrara que efectivamente el quejoso no había cumplido alguna carga procesal, o que la falta de impulso o trámite del proceso le era atribuible a su abandono ..."

Por su parte, el investigado y recurrente sostiene que existen "errores sustanciales" en que incurre la primera instancia, respecto a la evaluación del proceso policivo de humedades, a saber:

a) El Despacho de primera instancia yerra al "no observar que, si el Decreto 1944 de 1992 no contiene una norma que sancione a los querellantes por no ser diligentes en los procesos, el inspector se ve obligado a remitirse a una normatividad vigente, como lo es el Reglamento de Policía del Valle del Cauca, Ordenanza 343 de 2012, artículo 288 (...)".

Considera este Despacho que el cuestionamiento realizado por la primera instancia y contenido tanto en el auto de aplicación de proceso verbal (formulación de cargos) como en el fallo objeto de evaluación en esta providencia, no cuestiona la procedencia de la figura jurídica de la perención en los asuntos policivos, como parece entender el investigado, sino que expresa que la falta disciplinaria objeto de investigación corresponde a la aplicación que realizó el servidor público de la figura en el caso concreto y la vulneración de las funciones asignadas al servidor público, esto es, conocer, tramitar y decidir los procesos policivos sometidos a su conocimiento, como es el proceso de humedades objeto de investigación.

En efecto, en el texto de la decisión impugnada, señala que:

"(...) Sin entrar el Despacho a definir acerca de si viable o no la aplicación de esa institución en los procedimientos de humedad específicamente regulados por la disposición municipal, y su naturaleza jurídica; y de considerarle aplicable acorde a lo sostenido por el investigado y por los declarantes, no puede desconocerse los requisitos o condiciones que se requieren para su aplicación, y es el precisamente dejar la parte interesada transcurrir más de diez (10) días hábiles, sin hacer ninguna gestión de las que le corresponden para que el negocio continúe su curso o no asista la práctica de las pruebas que solicitó. (...)"

Por ello, en el caso que nos ocupa el reproche disciplinario ha sido el incumplimiento del deber funcional de impulsar, tramitar y resolver el proceso de humedad, que se procedió a archivar injustificadamente cuando se adujo que la parte querellante no había realizado impulso procesal alguno de la actuación policiva, desconociendo que estaba pendiente de que se llevara a cabo nuevamente la inspección ocular en el inmueble objeto de la nulidad, como fue ordenado en auto del 20 de octubre de 2015 y además le fue indicado claramente que se haría como carga, responsabilidad o deber de la Inspección de Policía de programarle esa diligencia, en la que además insistió para su práctica en los escritos que posteriormente elevó, conjuntamente con su compañera de vida, contravirtiendo además en sus escritos otras decisiones que claramente se observa que no le fueron resueltas por parte del Despacho a cargo entonces del servidor público investigado.

Considera el Despacho que ni siquiera la decisión que adoptó el 02 de agosto de 2016 tuvo la virtualidad de impulso y conclusión de la actuación, resolviendo una situación accesorio sin permitir efectivamente a las partes conocerla y atacarla, lo que resulta ser una actuación ineficaz cuando no se observa que hubiere dirigido una comunicación escrita o realizado una notificación personal a las partes o a la interesada, dando cuenta de esa decisión. (...)"



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

En ese orden de ideas, no le asiste razón al impugnante en señalar que no existe falta disciplinaria porque la norma permite la aplicación de la figura de perención; por cuanto la decisión de primera instancia ha sido clara en precisar que el cuestionamiento no corresponde sobre si procede o no la figura de la perención en los procesos policivos, sino en cómo el investigado la aplicó al caso concreto, señalando la primera instancia que no se encontraban establecidos los requisitos previstos en la norma frente a la inactividad del querellante, habida cuenta, que según el juicio de valor probatorio adelantado por el A Quo, estaban pendientes de realizarse otras actuaciones que debían ser atendidas por la Inspección de Policía y por ende no era factible castigar al querellante con una supuesta inactividad, tal como efectivamente ocurrió con la expedición de la decisión que dispone la perención con fecha agosto 10 de 2016.

b) Considera el recurrente que es un error del despacho de primera instancia sustentar su argumentación "en el oficio 289 del 20 de octubre de 2015, generado por la inspectora AMPARO RAMIREZ MACIAS, quien les expresó al querellante que realizaría de nuevo la visita de inspección ocular con perito.

No se tuvo en cuenta, (...) que en el Acta de la diligencia de inspección ocular, llevada a cabo el 8 de agosto de 2014, la perito ingeniera LUZ AMPARO ZAPATA, actuó en la diligencia, dio las recomendaciones de su experticia profesional, firmó dicha acta y en ella, se concedió un plazo a las partes para la ejecución de los trabajos que recomendó la perito... se corrió traslado en estrado de tres días para que las partes si lo consideraban necesario, solicitaran ampliación o aclaración (a folio 147 del expediente 647-16"

Bajo tal contexto, afirma el impugnante que dicha inspección ocular adquirió firmeza y por tanto, no era de recibo la petición de los querellantes frente a la solicitud de aclaración formulada el 2 de octubre de 2015 por ser extemporánea. Sostiene que el oficio 289 de 2015 es una comunicación "que carecía del acto principal que lo fundará, siendo que el acto administrativo del 20 de octubre de 2015, sin una motivación legal (...) aunado que al no firmar la inspectora dicho acto administrativo, este no tuvo existencia jurídica..."

Al respecto, considera este Despacho importante resaltar la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la naturaleza de los procesos policivos, así:

En el proceso de revisión de sentencias de tutela, la Corte evaluó un caso de un ciudadano que pidió el amparo constitucional porque su vivienda estaba afectada por el inadecuado manejo de aguas superficiales y subterráneas de un establecimiento vecino, que genera el riesgo de deslizamiento de su vivienda poniendo en riesgo su vida y la de su familia, indicando que si bien adelanta un proceso policivo al respecto aún no existe una decisión de fondo sobre el caso planteado. En esa oportunidad, el máximo tribunal constitucional precisó los siguientes temas para resolver el problema jurídico planteado:

Señaló sobre los procesos policivos que en los mismos "no se discute ni decide sobre el derecho de dominio, sino que se limita a preservar o restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. En



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

esos términos, ese juicio ha sido asimilado a controversias de naturaleza jurisdiccional y la providencia que se dicta no es susceptible de recursos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (...)"

Sobre el derecho a la vivienda digna, luego del recuento de la línea jurisprudencial, indicó que "En tal sentido, los particulares deben adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar que el disfrute de sus bienes afecte el goce del derecho a la vivienda digna de los demás ciudadanos, como sucede, por ejemplo, cuando la contaminación producida en un terreno afecta a los predios colindantes; no se adoptan medidas idóneas para evitar que las aguas lluvias sean debidamente drenadas; se producen ruidos ensordecedores, etcétera. El Estado, a su vez, en su posición de garante, debe actuar cuando quiera que se presenten tales interferencias en el goce de los bienes, tanto más y en cuanto se trata de la casa de habitación de una persona y su familia.²⁵

En sentencia T176 del 3 de mayo de 2019, Magistrado Ponente Carlos Bernal Pulido, la Corte señaló: "Los inspectores de policía son autoridades administrativas que excepcionalmente ejercen función jurisdiccional, a la luz de lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política. En este sentido, la Corte ha reconocido que "cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que se dicten son actos jurisdiccionales..."

En la sentencia T-302 de 2011 la Corte Constitucional precisó que "en los procesos de amparo policivo a la posesión o a la mera tenencia de bienes, las autoridades de policía, en cumplimiento de las competencias determinadas por la ley, ejercen función de policía con la finalidad de preservar y mantener el orden público policivo frente a manifestaciones que puedan perturbar el orden y la tranquilidad ciudadana. Orden público que hace referencia a las condiciones necesarias para el desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones entre los miembros de la sociedad y por ende para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes"

Por su parte el Código Nacional de Policía, Decreto Ley 1355 de 1970, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron origen al trámite policivo por humedades, contempló como contravención que da lugar a construcción de obra, las siguientes situaciones de hecho señaladas en el artículo 27, de las cuales por ser aplicables al caso concreto, se cita lo siguiente: "Los Alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán construcción de obra:
(...)

2. A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas, o las tengan en mal estado."

Sobre la construcción de obra, el artículo 198 ibídem determinó: "La demolición, la construcción o la reparación de obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si este no pago dentro del término señalado, el reembolso perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva.

En la orden se exigirá otorgamiento de caución para asegurar su cumplimiento."

El artículo 220 de la norma en comento, determinó la competencia de imponer medidas correctivas, entre otras, la de construcción de obra, en cabeza de los Alcaldes

²⁵ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T 895 del 16 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Municipales o quien haga sus veces. Es así que en Santiago de Cali, se expide el Decreto 1944 del 20 de noviembre de 1997, por medio del cual se asigna a las Inspecciones de Policía Municipal que, "conozcan de las contravenciones y la imposición de las correspondientes medidas correctivas, en los asuntos relacionados con las humedades en inmuebles ubicados en el Municipio de Santiago de Cali (...) y de las ocasionadas por mal estado del acueducto, del alcantarillado, por aguas lluvias no recogidas por falta de canoas o bajantes..."

El Decreto antes referido, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos objeto del proceso policivo que nos ocupa, da cuenta del trámite o procedimiento a seguir, indicando en el artículo segundo que la actuación se iniciará de oficio o por petición del interesado. En caso de provenir de solicitud efectuada por el interesado, la queja debe identificar la ubicación del inmueble, precisar los daños, origen o causa de la humedad, inundación o daños en el bien afectado y la identificación de los involucrados.

Señala el artículo tercero ejusdem, que una vez recibida la queja por el funcionario competente, debe proceder a avocar conocimiento y señalar fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación entre las partes, de la cual se levantará un acta con los correspondientes compromisos asumidos, en el evento de existir acuerdo entre las partes, o indicando que las partes no conciliaron.

Siendo que en el caso que nos ocupa las partes en el proceso policivo no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, tal como consta en la respectiva acta del 25 de junio de 2014, que obra visible del folio 21 a 22, correspondía al inspector continuar con el proceso hasta su culminación, conforme lo estipulado en el artículo 4 ibídem.

El artículo 5 señala que: "Oído en diligencia de descargos el presunto contraventor, si acepta los cargos y se compromete a realizar los correctivos pertinentes, se le dará un plazo prudencial no mayor de treinta (30) días calendario, en caso contrario se continuará con la actuación."

El artículo 6 dispone que se practicasen las pruebas solicitadas por el contraventor, el quejoso o las que de oficio disponga el despacho. Vencido el período probatorio, estipula el artículo 7, que se procederá a fijar fecha para realizar inspección ocular, "la que deberá realizarse con la intervención de un perito, (...) su designación se hará en la misma providencia y su posesión en el momento de la diligencia (...)".

El artículo 8 contempla que rendido el dictamen pericial procederá a señalarse el valor de los honorarios del perito y se correrá traslado a las partes por el término de tres días para que puedan pedir que se aclare o modifique, de conformidad con las normas del "Código de Procedimiento Civil".

Contempla el artículo 9 que "Vencida la etapa probatoria, el funcionario dictará la correspondiente resolución, en la que impondrá la medida correctiva más conveniente habida consideración de las circunstancias del hecho y las pruebas recaudadas."

Luego entonces, definidas las etapas procesales del asunto que motivó la presente investigación disciplinaria, se tiene probado en el expediente, el escrito de querella

40
quer



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16”

presentado por JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, en el cual además de narrar los hechos relacionados con las afectaciones al inmueble, solicitó: “se ordene y se practique una visita ocular al primer piso de mi vivienda, (...) ubicada en la diagonal 28 C No. 34 – 65 ... a fin de que se diagnostique la causa de los hechos antes narrados...” – Folio 11 y en escrito del 16 de junio de 2014, folio 18 a 19.

Que fracasada la etapa de conciliación entre las partes, la Inspección de Policía Urbana II del barrio Nueva Floresta, procedió a realizar inspección ocular al inmueble el 8 de agosto de 2014, en la cual se efectuaron unas recomendaciones de construcción de obra tanto en el inmueble del querellante como del querellado, concediendo el despacho un plazo para la ejecución de las obras hasta el 1 de octubre de 2014 y ordenó correr traslado a las partes del dictamen pericial e igualmente dejó constancia del pago de los honorarios de la perito por parte del querellante. El acta es suscrita por la Inspectora de conocimiento, las partes del proceso y la ingeniera Luz Amparo Zapata, folio 23.

El 2 de octubre de 2015 la parte querellante presenta petición orientada a dejar sin efectos la inspección ocular, por cuanto en la diligencia la “recomendación es realizada por la inspectora sin que tenga para ello como soporte de su decisión o sugerencia, un dictamen de la perito Luz Amparo Zapata...” pues no hay en el acta mención de la comparecencia de la perito ni fue posesionada, ni tuvo el uso de la palabra en la diligencia para “exponer su experticia” y “la inspectora tampoco concedió a la perito un término para (sic) rinda su experticia” e indicando que debe realizarse una nueva visita al inmueble con la presencia de la perito designada, folios 24 y 25 – 149 y 150, petición a la cual le siguen otras peticiones formuladas por el querellante, incluida solicitud de coadyuvancia y otras actuaciones en las que por no ser motivo de reparo el despacho no se detendrá.

A folio 160 del expediente aparece visible el informe secretarial del 20 de octubre de 2015, el cual da cuenta al despacho de la Inspección, que se encuentran “las peticiones elevadas ante este despacho por el Sr JORGE ENRIQUE LONDOÑO CUELLAR, querellante dentro del proceso de HUMEDAD 1944-549 radicadas en este despacho los días 2,8 y 9 de octubre de 2015, donde solicita se deje sin efectos las recomendaciones hechas en acta del 8 de agosto de 2014 ya que por un error involuntario del despacho, se omitió en dicha acta, el nombramiento y posesión de la Ingeniera perito”, respecto del cual, el despacho emite el Auto sin numeración del 20 de octubre de 2015 que DISPONE:

1. Dejar sin efecto las recomendaciones hechas en acta del 8 de agosto de 2014 realizadas dentro del proceso por humedad 1944-549.
2. FIJAR fecha y hora para la práctica de la diligencia de inspección ocular ...”

El anterior proveído, tal como lo señala el recurrente, no fue rubricado por la funcionaria de conocimiento, pero a continuación de la actuación, aparece visible el oficio 289 de octubre de 2015, en el cual como “Respuesta a solicitud” (folio 161 a 162) suscrito por la Inspectora AMPARO RAMIREZ MACIAS, en el cual informa de la decisión adoptada en el proceso e indica que “programará nuevamente fecha para la diligencia de inspección ocular...”, folio 161 y 162.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

En ese orden de ideas, este Despacho, para evaluar la conducta del disciplinado, tendrá en cuenta que la actuación antes referida, por la cual la inspección de policía dejó sin efectos las recomendaciones de la inspección ocular del 8 de agosto de 2014 y ordenó realizar una nueva inspección, tienen validez jurídica dentro del proceso policivo por cuanto no fueron declaradas nulas dentro del mismo ni existe decisión judicial que así lo disponga.

Ahora bien, frente al argumento del recurrente e investigado en este proceso disciplinario, al afirmar que dichas actuaciones no son válidas por no estar firmado el auto, por tratarse de una simple comunicación al oficio y porque la solicitud del querellante era extemporánea por presentarse por fuera del término de traslado del dictamen pericial, deberán ser consideradas en esta instancia, frente a las pruebas que reposan en el proceso disciplinario que en esencia se sustenta en el expediente policivo.

Así las cosas, considerando la naturaleza del proceso policivo, corresponde a los Inspectores de Policía en ejercicio de dicha función, atender y tramitar los respectivos procedimientos con cumplimiento de las reglas propias del Debido Proceso, teniendo en consideración que un fin del Estado es garantizar el efectivo goce y disfrute de los derechos de las personas; así como, resolver las controversias existentes o garantizar el acceso a la administración de justicia.

Uno de los principios que orienta la administración de justicia, aplicable en forma excepcional a los inspectores de policía cuando ejercen dicha función, tal como se indicó en la jurisprudencia antes citada, es el de la prevalencia del derecho sustancial, artículo 288 de la Constitución Política de Colombia.

Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en señalar que el núcleo esencial de la prevalencia del derecho sustancial sobre las ritualidades del procedimiento, debe entenderse así:

Sentencia C029 de 1995, precisó: "Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio."

En sentencia C131 de 2002, la Corte indicó: "2. Uno de los espacios en los que mayor incidencia ha tenido el constitucionalismo es el derecho procesal. En la tradición del positivismo formalista el derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa; era ajeno a propósitos que lo conectaran con los fines estatales y la protección de las garantías que lo integraban sólo se brindaba en esas actuaciones y bajo los estrechos parámetros de protección establecidos por el legislador. Así, no llamaba a interés el hecho de que, en materia de derechos, la sustancia que se tenía entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y formalidades de

42
Amal



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

unos procedimientos que las más de las veces se explicaban por sí mismos y que perdían puntos de contacto con lo que era objeto de controversia.

Pero esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho procesal para vincularlas inescindiblemente a la realización de las normas sustanciales. Las ha dotado de una teleología que no se explica a partir del solo rito o procedimiento sino en relación directa con las normas jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden. Las ha redimensionado para darles ahora el carácter de facultades irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas derechos fundamentales.

Con ello, ha dotado al proceso de una nueva racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto ineludible también constituye una finalidad del proceso. (...)"

En sentencia T 1091 de 2008, precisó: "2.1. La Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de las reglas de carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales (Corte Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001). Ha considerado que 'si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia' (Corte Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001). Para la Corte Constitucional 'el juez que haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación de fundamental, ignora claramente el artículo 228 de la Carta Política que traza como parámetro de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

(...) si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228)."

En esta decisión, la Corte indicó que se viola el derecho al debido proceso 'por exceso ritual manifiesto' en una sentencia cuando este implica una 'renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales'. Así lo ha considerado la Corte incluso para el caso de los procedimientos de casación, en los cuales el rigor procesal exige el cumplimiento de especiales y particulares requisitos formales. (Corte Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001)."

Así las cosas, aplicando al caso concreto el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las ritualidades del proceso, encuentra el despacho que la querella tenía por propósito establecer las causas de las humedades que afectaban el predio y casa de habitación del peticionario, por lo cual insistió en la práctica de la inspección ocular acompañada de un profesional idóneo que pudiera emitir tal concepto y en último caso, sustentar la medida correctiva a aplicar frente a la construcción de obras necesarias para solucionar el problema.

En ese orden de ideas, si bien la Inspectora de Policía de conocimiento en su momento adelantó la respectiva visita al predio, reconoce que por "error involuntario" no



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

posesionó a la perito por lo cual decidió practicar nuevamente dicha diligencia; empero, no firmó el proveído o decisión, situación que este Despacho considera subsanada con la expresa manifestación contenida en el oficio con el cual informó el sentido de su decisión, radicado 289 de octubre 20 de 2015, en el cual claramente da a conocer al querellante que dejaría sin efectos la diligencia practicada y fijaría nueva fecha.

Por otra parte, nótese que el oficio antes referido no puede ser desatendido o inobservado por este Despacho, tal como pretende el recurrente, habida cuenta que el mismo contenía una "respuesta" a derecho de petición impetrado por el ciudadano y por tanto, daba cuenta o informaba al querellante sobre el trámite de su proceso, indicando expresamente que se realizaría una nueva inspección ocular para lo cual debía estar pendiente de la fecha que fije el despacho, generando en el ciudadano la confianza legítima de que así iba actuar el Estado frente al asunto por Él imprecado, por lo cual quedó pendiente de la nueva fecha que para tal fin señalaré el despacho.

Ahora bien, frente a la extemporaneidad de la petición presentada por el querellante respecto al dictamen pericial, este Despacho no puede entrar a resolver particularidades del proceso policivo ni referirse a la procedencia o no de la decisión que adoptó en su momento la Inspectoría de conocimiento; sin embargo, es del caso destacar que la petición del querellante estuvo orientada a dejar sin efectos la inspección ocular, tal como se anotó en líneas precedentes, y no a ampliar o aclarar el dictamen rendido.

c) Considera el recurrente que existe un error de interpretación en la primera instancia, al considerar que no era procedente declarar la perención porque estaba pendiente practicar nuevamente la inspección ocular, cuando en su parecer, está claramente establecido en el proceso policivo la inactividad de la parte querellante, para lo cual solicita tener en cuenta que la Inspección recibió el 18 de diciembre de 2015 un escrito del querellante, en el cual, entre otras cosas, solicitó realizar la inspección en febrero de 2016, por cuanto saldría de viaje (Folio 34 y 35), denotando una falta de impulso procesal por cuanto la Inspectoría estuvo en su cargo hasta el mes de junio de 2016.

El impugnante considera que "mal se podría hablar de una nueva inspección ocular, por lo que el despacho, con dichas bases jurídicas, se remitió a la norma de la Ordenanza 343 de 2012, artículo 277, decretando la perención de forma objetiva", al considerar que existía un largo tiempo de inactividad procesal, según el recurrente, "El último, fue de un tiempo mayor a 200 días" y que la ley sólo exigía una inactividad de diez (10) días, siendo por tanto procedente decretar la perención.

Al respecto, cabe recordar que la figura de la perención se encontraba prevista en el artículo 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970, que en su tenor literal señalaba:

[Firma]
Guay



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

"Artículo 346. Perención del proceso. Cuando en el curso de la primera instancia el expediente permanezca en la secretaría durante seis o más meses, por estar pendiente su trámite de un acto del demandante, el juez decretará la perención del proceso, si el demandado lo solicita antes de que aquél ejecute dicho acto.

El término se contará a partir del día siguiente al de la notificación del último auto o al de la práctica de la última diligencia o audiencia. (...)

La perención pone fin al proceso e impide que el demandante lo inicie de nuevo durante los dos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la decreta, o de la del auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso.

(...)

El auto que decreta la perención es apelable en el efecto suspensivo. El que decreta el desembargo en procesos ejecutivos en el diferido, y el que lo deniegue, en el devolutivo."

"Artículo 347. Perención de la segunda instancia. Con las excepciones indicadas en el inciso sexto del artículo precedente, a solicitud de la parte que no haya apelado ni adherido a la apelación, el superior declarará desierto el recurso cuando por la causa indicada en el artículo anterior, el expediente haya permanecido en la secretaría durante seis o más meses, contados como se dispone en el inciso primero del mismo artículo."

Posteriormente la Ley 794 de 2003, por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, dispuso en el artículo 70 la derogatoria expresa de los artículos 346 y 347, situación que fue objeto de análisis por la Corte Constitucional en sentencia C 874 del 30 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, frente a demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos al considerar que dicha derogatoria "también implica una derogación tácita del artículo 19 de la Ley 446 de 1998", frente a lo cual la Corte señaló:

"La naturaleza jurídica de la perención como institución procesal.

La perención o caducidad de la instancia ha sido calificada como un modo anormal de terminación de proceso que se produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que no se realizan actos procesales de parte. La ley entonces autoriza que, transcurrido cierto término de inactividad, el juez la declare de oficio o a petición de la parte interesada[8], aclarando que en los procesos oficiosos no procedería dicha figura, sino únicamente, frente a los procesos dispositivos o mixtos.

Sobre "las condiciones para la eficacia de la perención dentro del contexto del proceso civil dispositivo o mixto, usualmente la doctrina señala las siguientes:

- a. Que el proceso se encuentre en la primera o en la segunda instancia.
- b. Que no se produzcan actos de impulsión del proceso provenientes de las partes. En este punto la doctrina y la jurisprudencia hacen hincapié en que debe tratarse de una inactividad de parte, por lo que si el proceso estuviera al despacho del juez, o si el paso siguiente fuera un acto suyo o del secretario, no habría lugar a la perención. Al respecto, por ejemplo, Chiovenda expresa: "Aquí debemos añadir que la



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

inactividad debe ser inactividad de parte (voluntaria o involuntaria, no importa), no del juez, puesto que si la simple actividad del juez pudiese producir la caducidad, sería remitir al arbitrio de los órganos del Estado la cesación del proceso. Por lo tanto, debe decirse que la actividad de los órganos jurisdiccionales basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante la inactividad de los órganos públicos (por ejemplo en el intervalo entre la discusión y la sentencia) las partes no pueden realizar actos de desarrollo del proceso."[11] Por lo anterior la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que todo acto del juez interrumpe la perención y en que la perención no se produce cuando la inactividad es del juzgado.[12] A hora bien, sobre la base de que lo que produce la perención es la inactividad de las partes, debe aclararse que, dentro del contexto de un proceso dispositivo o mixto, en la primera instancia corresponde activar el proceso al demandante, pero que esta carga puede corresponder al demandado si ha propuesto un incidente, pues se convierte en actor para ese solo propósito, y que en la segunda instancia el impulso le corresponde al demandante."

En esa oportunidad, frente a la consecuencia de la ocurrencia de la perención en el proceso, señaló: "...consisten en que el proceso termina como si hubiera sido anulado; pero, más allá de esta consecuencia, en principio no afecta el derecho de acción, ni el derecho sustancial objeto del litigio. Sobre el punto Chiovenda expresa que *"la caducidad es un modo de extinguirse la relación procesal, que tienen lugar al transcurrir un cierto período de tiempo en estado de inactividad. No extingue la acción, sino que hace nulo el procedimiento..., esto es, extingue el proceso con todos sus efectos procesales y sustanciales."*[14] Es decir, la perención no extingue el derecho sustancial ni la acción correspondiente, la cual, en principio, una vez declarada la caducidad puede ser intentada *ex novo* después de cierto tiempo.[15] En este sentido el derogado artículo 346 del Código de Procedimiento Civil decía que la perención ponía fin al proceso e impedía al demandante iniciar uno nuevo durante los dos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la decretara, o de la del auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso. Sin embargo, agregaba que decretada la perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, se extinguía el derecho pretendido.

Respecto de los efectos de la perención decretada dentro del proceso ejecutivo, la Corte ha explicado que "para el caso del proceso ejecutivo tanto singular como prendario o hipotecario, no extingue el proceso, tampoco el derecho pretendido, mucho menos el gravamen. Su efecto se traduce en el desembargo de los bienes, con la consecuencia gravosa para el ejecutante de no poder pedir de nuevo el embargo sino transcurrido un (1) año."

También sobre los efectos de la perención una vez declarada, la doctrina es unánime al reconocer que la caducidad es indivisible, es decir, que beneficia o perjudica a todos los intervinientes dentro de la relación procesal...."

Frente a la figura de la perención en la Constitución de 1991 y el derecho de acceso a la administración de justicia, la Corte señaló: "En síntesis, la jurisprudencia de esta Corporación relativa a la institución procesal de la perención se ha orientado en el sentido de reconocer que, dado que el fin del Estado es garantizar la efectividad de los derechos constitucionalmente reconocidos (C.P., art. 2o.), para lo cual se establece el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229), la cual debe responder a los principios de celeridad y eficacia (C.P., art. 228) de manera que se satisfaga el derecho de las partes a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos, la perención, tanto en



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

el proceso civil como en el contencioso administrativo, es un adecuado desarrollo de "los principios de celeridad, economía, efectividad y eficacia que informan nuestro ordenamiento procesal, con fundamento en los cuales se debe propender por la agilidad de los procedimientos, porque toda actuación, instancia o proceso llegue a su fin, evitando que queden inconclusas, indefinidas o sin agotarse por la incuria de la parte que tiene la carga procesal de actuar y en perjuicio de la otra".

En esa oportunidad, concluyó la Corte que: "desaparecida la institución procesal de la perención, y dentro del espíritu que informa al legislador de profundizar en la figura del juez como director del proceso, corresponderá a este funcionario asumir con renovado énfasis sus facultades y deberes de impulsión del trámite a fin de evitar su paralización, dirigiéndolo hasta su culminación en la sentencia. Ello debe lograrse mediante el oportuno ejercicio de sus poderes de ordenación, instrucción y disciplinarios que le permiten proferir oportunamente los autos que le dan curso progresivo al proceso, precluir sus etapas, decretar de oficio las pruebas en los términos probatorios de las instancias o de los incidentes o antes de fallar cuando las considere útiles, pertinentes y conducentes para la verificación de los hechos, exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones procesales que incumben a las partes, y sancionar a los sujetos procesales cuando sea del caso. En el cumplimiento de estas responsabilidades tienen los jueces de la República la misión de hacer efectiva la pronta administración de justicia, como derecho constitucional y valor fundamental sobre el que se edifica la convivencia pacífica", declarando la exequibilidad de la norma.

Así las cosas, trasladando los criterios normativos procesales antes referidos a la figura de la perención al caso concreto, tenemos que por tratarse el asunto policivo objeto de estudio de un proceso mixto; es decir, que el impulso del proceso dependen tanto del demandante (en este caso querellante) como del funcionario de conocimiento (para el caso Inspector), era susceptible de aplicar la figura de la perención siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos.

En efecto, el requisito *sine qua non* para la procedencia de la perención consiste en la inactividad procesal de la parte (querellante) de ahí que el análisis que realiza el operador disciplinario de primera instancia resulta de gran importancia para establecer que en el estado en que se encontraba el proceso policivo, el impulso no dependía del querellante o interesado, sino del funcionario de conocimiento o Inspector, análisis que comparte esta instancia, habida cuenta que efectivamente la Inspección había comunicado oficialmente al interesado que practicaría una nueva inspección ocular, tal como se indicó en líneas anteriores, por lo cual la actuación a seguir por parte del funcionario de conocimiento era fijar fecha y hora para la diligencia.

Pero adicionalmente, en el caso que el Inspector considerará que la diligencia era válida y no había motivo para practicar una nueva, debía conforme al procedimiento emitir una decisión al respecto o proceder a adoptar decisión de fondo al encontrarse concluida la etapa probatoria, tal como lo dispone el artículo 9 del Decreto 1944 de 1997, que en su tenor literal indica: "Vencida la etapa probatoria, el funcionario dictará la correspondiente resolución, en la que impondrá la medida correctiva más conveniente habida consideración de las circunstancias del hecho y las pruebas recaudadas."

Guay
47



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

Así las cosas, el impulso procesal en esta etapa del proceso policivo no era atribuible al interesado o querellado, sino que se encontraba en cabeza del Inspector de conocimiento, quien debió tomar una decisión o disponer la práctica de pruebas adicionales o las decisiones que considerará pertinentes, pero no la de archivar la actuación por perención; toda vez que el asunto por el cual el interesado acudió a su despacho aún no había sido resuelto de fondo, en el sentido de establecer las causas de la humedad y las obras a ejecutar, denotando un incumplimiento al deber funcional asignado al Inspector de Policía frente a conocer, tramitar y decidir los asuntos a su cargo.

CONCLUSION

Corolario de lo antes expuesto, considera este Despacho que es viable confirmar la decisión adoptada por la primera instancia; así como, disponer trasladar a la Personería Distrital de Santiago de Cali copia del presente proveído para que evalúe la procedencia de iniciar o no actuación disciplinaria frente a los períodos de tiempo que el investigado considera no hubo impulso o actividad en el presente proceso disciplinario.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde de Santiago de Cali,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión calendada el 27 de abril de 2022, Resolución No. 4124.010.21.020, Fallo de Primera Instancia emitido por el Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali, en el cual declaró a HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.623.237 de Ciénaga, Inspector de Policía Urbano Categoría II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio la Nueva Floresta de la ciudad de Santiago de Cali, responsable disciplinariamente e impuso sanción de SUSPENSIÓN durante UN MES E INHABILIDAD ESPECIAL POR IGUAL TÉRMINO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, de conformidad con los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, para tal efecto librese la comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la misma. En caso de no poder notificarse personalmente, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 107 del Código Disciplinario Único.

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Personería Distrital de Santiago de Cali copia del presente proveído para que se sirva evaluar la procedencia de iniciar o no una actuación disciplinaria por los períodos de tiempo que el investigado considera no hubo impulso o actividad en el proceso disciplinario.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 4112.010.21.0050 DE 2022

(Agosto 3)

"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16"

ARTICULO CUARTO. COMISIONAR al Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali para efectos de dar cumplimiento a lo resuelto en el presente proveído y notificar la decisión.

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR el expediente al Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali, para los fines correspondientes e informar de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 3 días del mes de Agosto de dos mil veintidós (2022)

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

Proyectó: Genny Mireya Eraso Muñoz - Asesora

Revisó: María del Pilar Cano Sterling- Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Revisó: Manuel Francisco Arango Zambrano, Subdirector de Doctrina y Asuntos Normativos

Revisó: Nhora Yaneth Mondragón Ortiz, Secretaria de Gobierno



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202241240100044401

Fecha: 10-08-2022

TRD: 4124.010.9.13.672.004440

Rad. Padre: 202241240100044401

HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH

Correo: hugues.olivella@cali.gov.co y olivella26@hotmail.com

Celular: 314-5542794

Distrito Especial de Santiago de Cali

Asunto: Notificación personal de decisión de Segunda Instancia proceso disciplinario, expediente No. 647-16

Cordial saludo:

Para fines de su notificación, atentamente me permito informarle que mediante Resolución No. 4112.010.21.0050 del 03 de agosto de 2022 "por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 4124.010.21.020 del 27 de abril de 2022", el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali ha resuelto Confirmar la Resolución No. 4124.010.21.020 del 27 de abril de 2022" dentro del proceso disciplinario con radicado N° 647-16 en este mismo sentido, dispuso en sus artículos 2° y 4° lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, de conformidad con los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2022- Código Disciplinario Único advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno, para tal efecto librese la comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la misma. En caso de no poder notificarse personalmente, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 107 del Código Disciplinario Único.

(...)

ARTÍCULO CUARTO: COMISIONAR al Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali para efectos de dar cumplimiento a lo resuelto en el presente proveído y notificar la decisión.

Conforme a la comisión ordenada por la Segunda Instancia, se procede a notificarlo a través de su correo electrónico reportado y se le informa que la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del correo electrónico enviado; de la decisión que se le notifica, se le envía la correspondiente copia digitalizada en formato PDF.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Las notificaciones personales de las decisiones que se adopten en el proceso disciplinario, podrán ser enviadas a la dirección del correo electrónico que se tiene establecido hasta el momento ante la Administración Distrital, y en caso de cambiar dicha dirección electrónica o utilizar otro correo electrónico, deberá informarlo a este Despacho por escrito.

Se le informa que de la anterior decisión no procede recurso alguno.

Atentamente,

GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO

Director

Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno

Proyectó: Alberto Gil Sánchez - Contratista



GIL SÁNCHEZ, ALBERTO <alberto.gil@cali.gov.co>

NOTIFICACIÓN DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA PROCESO RADICADO N° 647-16

1 mensaje

GIL SÁNCHEZ, ALBERTO <alberto.gil@cali.gov.co>

18 de agosto de 2022, 15:19

Para: Hugues Othon Olivella Saurith <hugues.olivella@cali.gov.co>, olivella26@hotmail.com

HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH

Correo: hugues.olivella@cali.gov.co y olivella26@hotmail.com

Celular: 314-5542794

Distrito Especial Santiago de Cali

Cordial saludo,

El Departamento se permite compartir información relacionada con el proceso que se menciona en el asunto.

1. Oficio de notificación con radicado Orfeo N° 202241240100044401 del 10 de agosto de 2022. (Formato PDF)
2. Resolución N° 4112.010.21.0050 del 03 de agosto de 2022. (Formato PDF)

Con el ánimo de procurar el uso de las tecnologías de la información, comunicaciones de gestión y trámites de los procesos, para facilitar y agilizar se da uso a este mecanismo como medio idóneo, el que para todos los efectos legales se entiende presentado. (Ley 1952 de 2019, Ley 2213 de 2022 y demás normas concordantes y vigentes)

Atentamente,

ALBERTO GIL SÁNCHEZ**Abogado / Contratista**

Departamento Administrativo de Control

Disciplinario Interno - DACDI

Alcaldía de Santiago de Cali

Teléfono: (57+2) 6680571

CAM Avenida 2 Norte # 10-70 - Plataforma I - Piso 11

www.cali.gov.co**2 adjuntos****NOTIFICACIÓN DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA EXP RAD N° 647-16.pdf**
384K**RESOLUCIÓN 2a INSTANCIA N° 0050 AGO 03_22 EXP 647-16.pdf**
16517K



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

NOTA DE EJECUTORIA

Expediente No. 647-16.

DISCIPLINADO: HUGUES OTHON OLIVELLA SAURITH.

En Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022), se indica que el tres de (03) de agosto de dos mil veintidós (2022), a las cinco y media (5:30 p.m.) de la tarde, quedo ejecutoriada y en firme la Resolución No. 4112.010.21.0050 del 03 de agosto de 2022, "POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO 647-16", que confirma la decisión de primera instancia proferida por el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de Santiago de Cali, a través, de la Resolución No. 4124.0.10.21.020 de abril 27 de 2022, por el cual, se impuso sanción disciplinaria al señor Hugues Othon Olivella Saurith, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.623.237 de Ciénaga (Magdalena) en su condición de Inspector de Policía Urbana Categoría II en la Inspección de Policía Urbana del Barrio La Nueva Floresta, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo e INHABILIDAD ESPECIAL, por el término de un (01) mes.

Se envía notificación personal de decisión de segunda instancia el día dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) y habiendo transcurrido el término de dos (2) días hábiles siguientes al recibido de la citación de notificación, se entiende como surtida la misma.

GUSTAVO ARBOLEDA DELGADO
Director

Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno